***Subproceso de Modernización Institucional***

***Proceso de Ejecución de las Operaciones***

***Dirección de Planificación***

***Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas***

**383-PLA-RH-MI-2021**

***Elaborado por:***

*Inga. Hazel Calderón Mata*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NOMBRE** | **Puesto** |
| **Revisado por:** | Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar | Jefe a.i. del Subproceso Modernización Institucional |
| **Aprobado por:** | Ing. Dixon Li Morales | Jefe a.i. del Proceso de Ejecución de las Operaciones |
| **Autorizado por:** | Lic. Nacira Valverde Bermúdez | Directora de Planificación |

Abril 2021

# **Oficios y referencias**

En el siguiente cuadro se detalla los números de oficios de la Secretaría General de la Corte y, las referencias internas de la Dirección de Planificación que corresponden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. Referencia Interna** | **No. Oficio de la Secretaría** | **Oficios Relacionados** |
| 1610-18 | 10473-18 | - |
| 1692-18 | 10880-18 | - |
| 1859-18 | - | Correo del 13-nov-18 de la Dirección de la Defensa Pública, sobre cantidad de usuarios indígenas. |
| 150-19 | 951-19 | - |
| 384-19 | 2339-19 | - |
| 760-19 | 4238-19 |  |
| 225-20 |  | Seguimiento a las recomendaciones emitidas para la Defensa Pública, en informe 634-PLA-RH-MI-19. |
| 1552-20 | 8345-20 | EJ-DIR-146-2020, del 10 de agosto de 2020, suscrito por la licenciada Rebeca Guardia Morales, Directora interina de la Escuela Judicial. |
| 292-21 |  | Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 |
| 341-21 |  | Revisión de controles mínimos que deben cumplir las oficinas judiciales asociadas al acceso a la justicia de la población indígena. En respuesta al oficio 507-PLA-RH-MI-2020. |

# Proyecto u oficinas analizadas

Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial a partir de la promulgación de la **Ley 9593 de Acceso a la Justicia a los Pueblos Indígenas**. Se analiza el impacto en la Defensa Pública a raíz de la promulgación de la citada ley, con datos suministrados por dicha administración y, proyección de la demanda de la Defensa Pública a partir de los datos históricos del área jurisdiccional.

# Antecedentes

Respecto a la plaza de Supervisión de Asuntos Indígenas, se consulta al Señor David Madrigal Robles, Coordinador a.i de la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales de la Dirección de Gestión Humana y, mediante correo electrónico del 11 de febrero de 2021, el Señor Reyni Campos Acuña, Profesional de la Unidad de Presupuesto y Estudios Especiales de la Dirección de Gestión Humana, adjunta el acuerdo del Consejo Superior 015-2013 (*Presupuesto 2014*) del 22 de febrero de 2013. En dicha sesión se presentó el proyecto de creación de una de Defensora o Defensor Público Supervisor que se dedicará a la atención de asuntos indígenas a partir del año 2014. Así mismo, en el citado acuerdo del Consejo Superior se indica textualmente:

*(…) “4.12. De contar con la plaza analizada, su carga de trabajo promedio mensual sería de* ***48 personas****, siendo una carga importante, tomando en cuenta que se debe desplazar a las diferentes zonas indígenas y que pueden presentarse choques de* ***audiencias y otros****.” (…)*

*(…) “La plaza de Defensor/a Público/a que atenderá los asuntos indígenas, deberá quedar adscrita a la Jefatura de la Defensa Pública.” (…)*

Esta plaza de Supervisión de Asuntos Indígenas fue prorrogada a raíz de la solicitud de la Jefatura de la Defensa Pública, al ser de intereses institucional y, es partir del 16 de marzo de 2015 que adquiere su carácter de ordinario como plaza número 370070.

Posteriormente, el 03 de agosto de 2018 se presentó el oficio JEFDP-0908-2018 del 23 de julio de 2018 donde se conoce la propuesta de Modernización de la Estructura de la Defensa Pública y, es en sesión 97-18 del 06 de noviembre de 2018 que se aprueba la propuesta. En ese oficio se indica que la implementación de la estructura por procesos en la Defensa Pública no requiere de la creación de ninguna plaza nueva, sino que se realiza una redistribución de recursos a fin de maximizarlos; para las Jefaturas de los Procesos: Supervisión por Región, Supervisión Disciplinaria, Modernización Institucional, Área Penal y Área Social, se utilizarán plazas de Defensor o Defensora Pública Supervisora (*incluyendo Supervisión de Asuntos Indígenas*).

La Dirección de Planificación remite el oficio 3-PLA-DO-2015 del 27 de febrero de 2015, el cual es conocido por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 19-15 del 04 de marzo de 2015; el cual recomienda la creación de una plaza de Defensora o Defensor Público en condición extraordinaria con plazo de 12 meses (*durante el año 2016*), para la atención de la materia agraria. No obstante, a continuación, se cita textualmente el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial:

*“Aprobar el informe presentado por el Departamento de Planificación, con la observación de que las plazas se crean en forma ordinaria con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las comunidades indígenas…”.*

Mediante oficio 37-CSP-18 del 9 de abril, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, sesión extraordinaria 25-18 del 4 de abril, donde se aprobó el informe 20-PLA-OI-2018, presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, entre las que se destaca asignar **siete plazas extraordinarias de Defensor Público para la atención de materia Agraria**, por todo el período 2018 en apoyo del plan de descongestionamiento del Tribunal Agrario, y se estima la continuidad de las plazas de defensores para el período 2019.

Por otra parte, en relación con el Proyecto de Ley denominado*: “Carta de derechos sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas”*, expediente 17805; mediante oficio 10880-18 del 22 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 86-18, del 2 de octubre, artículo LXVI donde se acoge la solicitud presentada por la Jefatura de la Defensa Pública mediante oficio JEFDP-1123-2018 del 17 de setiembre de 2018 y se hace de conocimiento del acuerdo a la Dirección de Planificación con la finalidad que realice el análisis de todos los aspectos que implique el cambio por la entrada en vigencia de lo que ese entonces era el proyecto de Ley. En este particular, se resalta que la Ley 9593 de Acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, entró en vigencia a partir de su publicación, la cual fue realizada en la Gaceta 179 (*Alcance 174*) del 28 de setiembre de 2018.

Además, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, de la Dirección de la Defensa Pública señala que:

*“Dentro del estudio que realiza la Dirección de Planificación sobre las cargas de trabajo de plazas asignadas a la jurisdicción de Flagrancia, se valore la posibilidad de que algunas de estas plazas sean reasignadas a la atención de la población indígena para garantizar su acceso a la justicia …”.*

Debido a lo anterior, mediante oficio 10473-18, del 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Corte, se remite el acuerdo del Consejo Superior, en sesión 87-18 del 4 de octubre de 2018, artículo LXXXIV, donde se considera trasladar la gestión presentada por la máster Diana Montero Montero, Jefa a.i. de la Defensa Pública, mediante oficio JEFDP-1244-2018 del 1 de octubre de 2018, a estudio de la Dirección de Planificación, e informe a este Consejo lo que corresponde.

En otro orden de ideas, es relevante hacer mención que mediante el informe 34-PLA-EV-2017 de la Dirección de Planificación, sobre el Impacto organizacional y presupuestario para el Poder Judicial en caso de aprobarse el proyecto de Ley denominado “**Código Procesal de Familia**”; se analizó lo referente a la Defensa Pública en la atención de asuntos en materia de Familia, Violencia Doméstica y Pensión Alimentaria; donde, se consideró entre otros asuntos crear un total de **33 plazas de Defensor Público para la defensa de la parte actora en asuntos de Pensión Alimentaria**. El citado informe fue conocido por el Consejo Superior en sesión extraordinaria de presupuesto 43-17, del 5 de mayo del 2017, artículo XXIV y por Corte Plena en sesión 16-2017, del 1 de junio del 2017, artículo II, durante las sesiones de trabajo para analizar el proyecto del Presupuesto de Poder Judicial para el 2018, y se acordó:

*“Sometido el asunto a votación, por unanimidad, se dispuso: Acoger la propuesta planteada por la magistrada Arias y el magistrado Salazar Alvarado, en consecuencia, los presupuestos actualizados de impacto de Justicia Restaurativa y de las Reformas Procesal de Familia y Agrario se conocerán en el momento en que sean Leyes de la República.”.*

Seguido, la Dirección de Planificación da a conocer, por medio del oficio 1285-PLA-2019 del 16 de agosto de 2019 que, mediante correo electrónico del 13 de agosto del 2019, la Magistrada de la Sala Segunda Sra. Julia Varela Araya solicitó a la Dirección de Planificación modificar las estimaciones del impacto presupuestario que tendría la implementación del proyecto de Ley del “**Código Procesal de Familia**” que se tramita en el expediente 19455 de la Asamblea Legislativa. Donde, textualmente se expone:

*“…con la finalidad de disminuir el impacto económico de la implementación del referido código, se eliminaron tres temas importantes que contenían el mayor peso desde el punto de vista económico, para esta importantísima y necesaria reforma. Lo eliminado se refiere a: Los equipos interdisciplinarios, para los despachos de Familia que lo requerían*

1. *Los juzgados sumarios que se creaban*
2. *La Defensa Pública para atender en todos los casos de familia, donde se dieran intereses contrapuestos*

*Como consecuencia de lo anterior, en el tema de la Defensa Pública, el contenido del artículo 56, del proyecto de Ley consultado a Corte, cuyo informe se rindió el pasado lunes 12 de agosto,* *solo refleja lo que actualmente está dentro la Ley de Pensiones Alimentarias vigente; por lo que no debe de interpretarse que se están creando obligaciones nuevas de plazas para Defensa Pública, para atender casos de pensiones alimentarias.*

*En consecuencia, dentro de los costos del proyecto del Código Procesal de Familia,* ***no debe existir ninguna suma para la creación de plazas de asistencia letrada de la Defensa Pública****, tal y como lo expliqué ayer en Corte Plena, en el informe rendido…”.*

Por lo mencionado anteriormente, es importante indicar que, este nuevo planteamiento solicitado por la Magistrada Varela Araya, difiere del presentado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos en el 2017, propiamente en cuanto a la exclusión de 33 plazas de Defensora o Defensor Público, que se requerirían para dar cobertura nacional a la atención en pensión alimentaria a la parte beneficiaria que no cuente recursos económicos para contratar patrocinio letrado conforme al artículo 56 del proyecto de este proyecto de Ley, donde no se debe interpretar que se están creando nuevas obligaciones de plazas para la Defensa Pública para atender casos de pensiones alimentarias.

El proyecto de Ley del “**Código Procesal de Familia**” fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 2018.

En sesión 34-18 del 25 de abril de 2018 del Consejo Superior, se dispuso:

*“1) Aprobar el informe 33-PLA-MI-2018 presentado por la Dirección de Planificación y sus recomendaciones, de acuerdo al escenario planteado en la recomendación 5.1.2.*

*2)* ***Siguiendo los lineamientos de la Corte Plena no se deberán incluir los recursos en el anteproyecto 2019 hasta que se apruebe la Reforma Legal como Ley de la República****”. (La negrita no es original del texto).*

Posterior, respecto a la Defensa Pública en materia de Pensiones Alimentarias (*incluida la población Indígena*) la Corte Plena en sesión 31-2020 celebrada el 2 de junio del 2020, artículo II aprobó la inclusión en el presupuesto extraordinario 2021 de la Institución 33 plazas de Defensora o Defensor Público:

*“Sin objeción de las señoras magistradas y los señores magistrados presentes, se dispuso: 1.) Aprobar la propuesta planteada por el magistrado Salazar Alvarado, en el sentido de autorizar al Presidente de la Corte y a la señora Vicepresidenta de la Corte para que tomen las decisiones que estime pertinentes, respecto a señalar a la Subcomisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, lo concerniente en cuanto lograr la aprobación del presupuesto del Poder Judicial 2021, así como las posibles negociaciones que se formulen, las que se harán de conocimiento del Consejo Consultivo de emergencia conformado con los Presidentes de las Salas, como respaldo a las decisiones que se tomen, a cuyos efectos cuando lo estime pertinente se hará acompañar de las diferentes direcciones, así como de la señora Fiscala General de la República, del señor Director del Organismo de Investigación Judicial y de la señora Directora de la Defensa Pública. Lo anterior, en el entendido de que posteriormente se hará de conocimiento de esta Corte. 2.) Agradecer y reconocer el trabajo realizado por los integrantes del Consejo Superior, las Direcciones de Planificación, Ejecutiva, Gestión Humana y Tecnología de la Información, que colaboraron en la elaboración del Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2021. 3.) Se declaran acuerdos firmes todos los acuerdos adoptados en esta sesión.*

*La Dirección de Planificación tomará nota para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.”.*

El Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión extraordinaria 44-19 (*Presupuesto 2020*) artículo II, del 16 de mayo de 2019 acordó aprobar el informe 634-PLA-RH-MI-2019 de la Dirección de Planificación, sobre el **Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (*Defensa Pública*) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas (*incluye materia disciplinaria, agraria y pensión alimentaria*);** donde se mantiene una plaza de persona Defensora por Oficina que cubre el tema de interés contrapuestos en materia agraria; y además, deben asumir la defensa técnica de aquellos asuntos Contenciosos Administrativos donde figure como parte actora o demandada una o más personas indígenas.

Posterior, el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión extraordinaria 47-19 (*Presupuesto 2020*) artículo XV, del 23 de mayo de 2019, dispuso de manera textual:

*“Aprobar las recomendaciones de la Dirección de Planificación, por tanto, mantener lo dispuesto por el Consejo Superior, se aclara a la Defensa Pública que precisamente por las razones expuestas en esta reconsideración, en el informe inicial se asignó un recurso humano para la zona de Buenos Aires por el impacto que representa en la prestación del servicio público”*

Este informe fue conocido y aprobado en la Sesión 22-19 de Corte Plena (*Presupuesto 2020*) celebrada el 6 de junio de 2019, Artículo IV; en el cual, se dispuso de manera textual:

*“Aprobar por separado del Presupuesto Ordinario del Poder Judicial, los requerimientos correspondientes a la “Ley 9593. Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica” en la forma indicada. Así votaron las magistradas y los magistrados Cruz, Solís, Molinari, Aguirre, Sánchez, Olaso, Chacón, Ramírez, Solano, Hernández, Salazar Alvarado, Araya, las Suplentes y los Suplentes León Díaz, Aragón Cambronero, Blanco González, Zúñiga Morales, Segura Bonilla, Alfaro Vargas y Chacón Jiménez.”.*

En oficio 101-P-2019, de fecha 17 de mayo de 2019 y dirigido a la Ministra de Hacienda, el Presidente de la Corte y en alusión al oficio DM-0466-2019, mediante el cual se informó de la aplicación de la Regla Fiscal en el presupuesto 2020, entre otras ideas al referirse al monto máximo autorizado al Poder Judicial, se indicó:

*“(…) Es importante señalar que estos datos no incorporan los requerimientos asociados a las nuevas obligaciones impuestas por la Asamblea Legislativa por aprobación de leyes, los cuales será necesario solicitar ante el Ministerio de Hacienda de forma complementaria al presupuesto ordinario.”.*

Posteriormente mediante oficio DM-0945-2019, de fecha 11 de junio del 2019, la señora Ministra de Hacienda y en alusión a lo indicado en el oficio 101-P-2019, comunica al presidente de la Corte Suprema de Justicia:

*“(…) Finalmente, en relación con las solicitudes complementarias al Anteproyecto de presupuesto de la institución a que se hace alusión en su oficio, le informo que el cumplimiento de la regla fiscal no da espacio para el financiamiento de nuevos gastos.”.*

En el oficio 118-P-2019 del 14 de junio de 2019, el presidente de la Corte solicitó a la Ministra de Hacienda se valorara la posibilidad de contar con financiamiento adicional al gasto ordinario para atender esta y cinco nuevas obligaciones más encomendadas por la Asamblea Legislativa.

Mediante oficio 1538-PLA-PP-2019, de fecha 20 de setiembre de 2019, la Dirección de Planificación al revisar el Proyecto de Presupuesto 2020 trasladado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa y en relación directa con los recursos adicionales solicitados por el Poder Judicial para la atención de nuevas obligaciones, en el apartado A.1. se indicó:

*“(…) No fueron incorporados por el Ministerio de Hacienda al presupuesto ordinario, ni tampoco se remitieron como requerimiento adicional a la Asamblea Legislativa.”.*

Este oficio mencionado anteriormente fue conocido por Corte Plena en sesión 41-2019, de fecha 30 de setiembre de 2019, artículo XV.

Finalmente, de acuerdo con la Ley No. 9791 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020, aprobada por la Asamblea Legislativa, se comprobó que los recursos para la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas **no fueron incorporados** durante la etapa de análisis y discusión por parte de la Asamblea Legislativa, esto según informe 1932-PLA-PP-2019 relacionado con el seguimiento realizado al Expediente 21.568 “***Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económica del 2020***” en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Por otro lado, mediante oficio 2339-19 del 6 de marzo de 2019, de la Secretaría de la Corte, se transcribe el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 13-19 del 15 de febrero de 2019, que literalmente dice:

*“Acoger la gestión anterior, en consecuencia: Autorizar al doctor Roberto Montero García, Defensor Público Supervisor, para que como recargo asuma en codefensa con las y los defensores públicos agrarios la representación de las personas usuarias que requieran de servicios contenciosos administrativos; además, la defensa de los dos funcionarios de Gestión Humana que deben ser representados y que a su vez funja como capacitador de la Defensa Pública en litigio Contencioso Administrativo en aras de poder asumir con responsabilidad la competencia creada en la Ley N°9530.”.*

La Dirección de Planificicación mediante el informe 490-PLA-EV-2019 del 03 de abril de 2019 recomienda que las dos plazas de Defensora o Defensor Público de la Secretaría Técnica de Género continuen en dicha oficina, pero colaborando en la atención de las necesidades planteadas en la Ley 9593 de Pueblos Indígenas, particularmente en materia contenciosa, de tal forma que puedan estar accesibles para las personas denunciantes de hostigamiento, violencia y discriminación y atiendan el programa de giras y talleres establecido desde el año anterior. No obstante, el Consejo Superior del Poder Judicial en sesion Superior 43-19 del 14 de mayo del 2019, artículo XL, acordó:

*(…) “3) No se aprueba lo recomendado respecto a las plazas de Defensor Público, sino que se deberá mantener solo una de estas plazas ordinarias en la oficina en cuestión, siendo que a partir de labores conexas que viene desarrollando la Dirección de Planificación en la Defensa Pública, se reasignará esta plaza para la atención de la nueva legislación que entró en vigencia a partir del 2018, atendiendo personas indígenas en los procesos Agrarios, Civiles, Contenciosos prioritariamente, así como defensa a servidores judiciales que son denunciados atendiendo las funciones inherentes a los cargos que desarrollan en el Poder Judicial, ya que se detectó la necesidad de reforzar estas funciones, pero no ha sido posible su asignación por la escases de recursos institucionales. Si se presentara un caso donde exista conflicto de intereses, la Secretaría de Género solicitará la colaboración a la Jefatura de la Defensa Pública, para lo que corresponda. La plaza que se trasladará de la Oficina de Género a la Defensa Pública, será la que indique la Jefatura de la oficina estudiada, quien deberá informar a la brevedad para realizar la variante.”.*

Posterior, el Consejo Superior del Poder Judicial en sesion Superior 72-19 del 16 de agosto del 2019, artículo VII, acordó:

*(…) “3) Acoger el recurso que plantea la licenciada Karen Rojas Paniagua, Representante Legal y Coadyuvante de las Víctimas de Hostigamiento Sexual, Discriminación y Violencia Doméstica de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia y, considerando que las víctimas son mayoritariamente femeninas y que se sienten más cómodas con el acompañamiento de otra mujer y por tener doña Karen más tiempo laborando en la Secretaría Técnica de Género, trasladar de manera definitiva la plaza No. 369766 ocupada en propiedad por el licenciado Jorge Miguel Sánchez Solano, Defensor Público de la Secretaría Técnica de Género, a la Defensa Pública para que se dedique a las labores que da cuenta. Lo anterior a partir de 01 de julio de 2019” (informe de la autoridad recurrida y prueba documental aportada).”.*

Es importante indicar que, el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 60-19, celebrada el 4 de julio de 2019, artículo VIII, acogió parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por *el* recurrente contra el acuerdo tomado en la sesión No. 52-19, del 7 de junio de 2019, artículo IX y acordó:

*"Acoger parcialmente el recurso de reconsideración presentado por el licenciado Jorge Sánchez Solano, Defensor Público, y modificar el acuerdo adoptado por este Consejo en sesión No 52-19 del 7 de junio de 2019, artículo IX, en el sentido que la Jefatura de la Defensa Pública deberá de mantener al licenciado Sánchez Solano destacado en una de las Oficinas del Primer Circuito Judicial de San José, reforzando aquellas áreas que estime conveniente, y de acuerdo a los conocimientos que tenga don Jorge. Por lo anterior, solicitar a la jefatura de la Defensa Pública, ubique y asigne funciones a citado servidor, que le permita mantener control sobre su salud, consideración para ello, el despacho que se adapte de mejor manera para ello. 2.) Deberá la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, apoyar y capacitar, al licenciado Sánchez Solano, en su formación como defensor público, para que pueda desarrollarse en ese campo, y afronte de manera exitosa las tareas que le sean asignadas, para el buen desempeño en sus labores. 3.) Por lo anterior, y con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por la Corte Plena para la atención en defensa de la persona indígena, en atención a la Ley 9593, la Defensa Pública, realizará los movimientos de personal que permitan ubicar a un profesional con el perfil idóneo, para atender esta labor.”.*

Por lo anterior, la Jefatura de la Defensa Pública solventó la necesidad movilizando al Dr. Roberto Montero García para la atención de esta materia.

Mediante el oficio 507-PLA-RH-MI-2020 del 30 de marzo el preliminar de este informe denominado Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas, fue puesto en conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Defensa Pública, Dirección de Tecnología de Información y Dirección de Gestión Humana, con el fin de que emitieran sus observaciones para ser consideradas en el informe.

Como respuesta se recibió el oficio 662-DTI-2020 del 3 de abril y el 712-DTI-2020 del 15 de abril de 2020 de la Dirección de Tecnología de Información; y el oficio JEFDP- 365-2020 del 14 de abril de 2020 de la Jefatura de la Defensa Pública, donde emiten sus observaciones al respecto.

El Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (*Presupuesto 2021*), celebrada el 17 de abril del año en mención, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020, dispuso lo siguiente:

**“*Se acordó: 1.)******Aprobar el informe 507-PLA-RH-OI-2020 de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones*** *(…)* ***2)*** *En relación con la solicitud de los recursos necesarios para la implementación de esta nueva legislación deberá solicitarse la incorporación de los recursos al Ministerio de Hacienda, de forma separada al Presupuesto ordinario, ya que constituyen necesidades adicionales para el Poder Judicial.* ***3.)******Rechazar las observaciones presentadas por la máster Diana Montero Montero, Jefa interina de la Defensa Pública y mantener el informe Nº 507-PLA-RH-OI-2020. 4.) Tomar nota de las observaciones presentadas por la máster Kattia Morales Navarro, Directora de Tecnología de la Información y tener por corregidas las observaciones señaladas, dentro del citado informe.******Se declara acuerdo firme.****”*” (La negrita no es del original)

El 17 de abril de 2020, ingresó como respuesta extemporánea el oficio CACC-116-2020 suscrito por el Magistrado por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, donde emite sus observaciones al respecto.

El 27 de abril de 2020, se recibió de forma extemporánea el oficio PJ-DGH-SAP-135-2020 de la Licda. María Gabriela Mora Zamora, Jefa de Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana, donde realiza observaciones referentes al informe 507-PLA-RH-MI-2020.

En sesión extraordinaria del Consejo Superior 45-2020 del 8 de mayo de 2020, artículo XXII fueron conocidos los oficios 659-PLA-RH-MI-2020 y 660-PLA-RH-MI-2020 donde se atendieron las observaciones planteadas por la Comisión de Acceso a la Justicia y por la Sección de Análisis de Puestos de la Dirección de Gestión Humana; en el mismo se dispuso por el Consejo Superior aprobar ambos oficios de la Dirección de Planificación y sus recomendaciones.

Posteriormente, como reconsideraciones al acuerdo tomado por el Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (*Presupuesto 2021*), celebrada el 17 de abril de 2020, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano 507-PLA-RH-MI-2020; se conoce el oficio 779-DTI-2020 del 29 de abril de 2020 y el 782-DTI-2020 ambos de la Dirección de Tecnología de Información; y el oficio JEFDP-450-2020 del 04 de mayo de 2020, suscrito por la M.Sc. Diana Montero Montero, Jefatura de la Defensa Pública.

En sesión extraordinaria del Consejo Superior 48-2020 del 14 de mayo en los artículos VII y X se conocieron los oficios 661-PLA-RH-MI-2020 de la Dirección de Planificación referente a las reconsideraciones planteadas por la Dirección de Tecnología de Información y el oficio 692-PLA-RH-MI-2020 en respuesta las reconsideraciones presentadas por la Jefatura de la Defensa Pública; en ambos artículos se dispuso aprobar los informes de la Dirección de Planificación y mantener lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión extraordinaria 38-2020 (*Presupuesto 2021*), celebrada el 17 de abril de 2020, artículo XXI.

En sesión extraordinaria de Corte Plena 31-2020 celebrada el 2 de junio de 2020, artículos I y II se acordó aprobar el Presupuesto ordinario del Poder Judicial para el 2021 correspondiente a la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.

Mediante el oficio 139-P-2020 del 12 de junio de 2020, el Señor Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; comunica al Señor Elián Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; que en la reunión sostenida el 01 de junio y en sesión N°31-20, articulo I del 02 de junio de 2020 se discutió y se aprobó el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2021, el cual se ajustó al límite presupuestario establecido por el Ministerio de Hacienda. Y, debido a las limitaciones presupuestarias, la Corte Plena acordó hacer una instancia, tanto al Ministerio de Hacienda como a la Asamblea Legislativa, para que se valore la posibilidad de contar con financiamiento adicional al gasto ordinario para atender las nuevas obligaciones encomendadas por el Asamblea Legislativa para la atención específica de la Ley 9593 de Acceso a Pueblos Indígenas (*entre otras leyes*).

Finalmente, Corte Plena en sesión 55-2020 del 28 de setiembre de 2020, tiene por rendido el informe de la Dirección de Planificación N°1430-PLA-PP-2020 del 22 de setiembre de 2020, así como la exposición de la Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora a.i de Planificación; sobre la revisión del Presupuesto ordinario del Poder Judicial del año 2021. Específicamente, sobre el presupuesto solicitado para el financiamiento de la **Ley 9593 Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas** se indica que no fueron incorporados por el Ministerio de Hacienda al presupuesto ordinario, ni tampoco se remitieron como requerimiento adicional a la Asamblea Legislativa.

El 11 de mayo de 2020 se interpone un recurso de amparo en contra del Poder Judicial y, mediante la resolución N°2020010431 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se le ordena a la persona coordinadora de la Defensa Pública de San Vito de Coto Brus realice las gestiones pertinentes para que, de forma inmediata, se verifique si la persona que interpuso el recurso de amparo cuenta con los medios económicos para sufragar patrocinio letrado y, si carece de los mismos, nombrarle una persona defensora que le represente en el proceso alimenticio. Lo anterior debido a que el **artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias** no realiza distinción alguna en cuanto a la parte actora a quien se le debe brindar la asistencia legal y, solo establece, a especie de requisito o condición para proveerlo que la parte interesada o solicitante carezca de recursos para sufragarlo, en cuyo caso debe ser demostrado previamente.

Respecto a la posible implicación de la representación de menores de edad y su rol de participación en los procesos judiciales, debe considerarse lo dispuesto en la Ley 9747 en la Sección III Capacidad y Representación, en la subsección II Representación procesal de personas menores de edad y de personas con discapacidad, específicamente en los artículos 41 y 42 y el rol que podrá asumir la Defensa Pública. **Ver apéndice 9**.

***“Artículo 41- Representación de personas menores de edad***

*Se reconoce a todas las personas mayores de doce años el ejercicio personal y pleno de la capacidad procesal para el trámite de los procesos establecidos en este Código, sin perjuicio de que prefieran que sus padres u otras personas representantes actúen en su nombre.*

*Tratándose de personas menores de doce años, la autoridad judicial llamará a quien ejerza la responsabilidad parental o bien, en su caso, a quien asigne el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y, si esta persona no se encontrara disponible en ese momento, podrá nombrársele representación provisional hasta tanto el ente mencionado apersone a la persona elegida. No obstante, estas personas podrán ejercer el derecho a ser oídas y participar activamente de manera progresiva y conforme a su capacidad volitiva, según la ley y bajo la apreciación del tribunal, teniendo derecho de acudir personalmente ante este y a que se les atienda de forma personalizada y conforme a sus características etarias, debiendo velar, las personas funcionarias judiciales, por la efectivización de los derechos de las personas menores de edad.*

*Excepcionalmente, las personas menores de doce años podrán accionar de forma personal. En este caso, para el inicio del proceso el tribunal deberá contar con un informe psicológico del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, que acredite que la persona menor de edad tiene la capacidad para ejercer dicha acción.”*

***“Artículo 42- Asistencia y patrocinio letrado gratuito***

*El Estado garantizará la asistencia y el patrocinio letrado gratuito a las personas menores de edad que carezcan de medios económicos suficientes.”.*

# Justificación

El siguiente informe responde a la actualización del análisis presentado para el presupuesto 2021 que contempla los cambios de entrada en vigencia de la **Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas**, ya que en el presupuesto 2021 no se brindaron recursos para cubrir esta nueva legislación, por lo que nuevamente se revisa y actualiza el informe para conocimiento del Consejo Superior y Corte Plena.

Aunado a lo anterior, el presente informe técnico es insumo por lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (*medidas cautelares 321-12*), con la finalidad de establecer al Estado Costarricense el deber de adoptar las acciones necesarias para proteger la vida de las poblaciones indígenas.

Además de lo anterior, a continuación, se numeran aspectos técnico jurídicos que justifican el presente estudio:

1. **Constitución Política**

La Constitución Política de Costa Rica, el pasado 24 de agosto de 2015, estableció dentro del Artículo 1°: “*Costa Rica es una República democrática, libre, independiente,* ***multiétnica*** *y* ***pluricultural***” (el resaltado no pertenece al original); lo cual nos permite desarrollar otro concepto como lo es el Pluralismo Jurídico, el cual consiste en lo siguiente: “*Es una perspectiva teórica que* ***permite reconocer la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico*** *en el que se dan múltiples conflictos de interlegalidad*” (el resaltado no pertenece al original); es decir que como estado, se permite la aplicación de más de una jurisdicción dependiendo de la cultura o etnia a la que se le brinde un servicio público.

1. **Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución 16/15**

Los pueblos indígenas de Teribe y Bribri de Salitre, interpusieron una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en fecha 30 de abril de 2015, mediante resolución número 16/15, dictaron una medida cautelar contra el Estado Costarricense, en donde se le solicita al Gobierno de Costa Rica: “*a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y le integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes se encontrarían en la región sureste del departamento de Puntarenas, específicamente en la zona denominada Salitre. b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes. c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.*”.

También y sumado a lo anterior, se indica que existe la siguiente normativa indígena de rango supraconstitucional:

* Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (*Convenio 107 OIT*).
* Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (*Convenio 169 OIT*).
* Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007.
* Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016.

A su vez, también se cita la normativa regional y nacional:

* Constitución Política 1949.
* Ley de derechos transfronterizos.
* Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas (*2018*).
* Ley Indígena 6172 (*1967*).
* Ley de Tierras y Colonización 2825 (*1961*).
* Ley de Biodiversidad 7788 (*1998*).
* Ley del Instituto de Desarrollo Rural (*2011*).

1. **Convenio 107**

En cuanto al Derecho Indígena se refiere, existe el Convenio 107 “*Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países*”, ley que data de 1957. Esta ley a su vez prohíbe trasladar a la población de sus territorios sin su libre consentimiento, salvo las siguientes excepciones:

* Suministrarles tierras en igualdad de condiciones.
* Indemnizarles totalmente por el desplazamiento.
* Darles la posibilidad de regresar si desaparece la causal.

Además de lo anterior, el Convenio 107 de 1957 también establece a las poblaciones indígenas se les debe respetar sus modos de transmisión del derecho de propiedad y goce de la tierra; esos modos de transmisión son establecidos por costumbres de las personas indígenas; y deben también establecerse medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan aprovecharse de:

* Sus costumbres.
* La ignorancia de las leyes para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan.

El convenio 107 de 1957, sufrió una actualización en 1989, mediante el convenio 169 de la OIT: “*Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 1989*”, en donde se indica lo siguiente: Los Estados deben:

* Asumir la responsabilidad de desarrollar, **con la participación de los pueblos interesados**, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos” (el resaltado no pertenece al original).
* Garantizar el respeto a la integridad de las personas indígenas.
* Asegurar a dichos pueblos gozar con la igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población.
* Promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos.
* Respetar su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones (pesca del gaspar, únicamente permitida para la población indígena).
* Respetar sus instituciones (Consejo de Mayores).
* Eliminar las diferencias socioeconómicas (por medio de acciones afirmativas: prueba documental/prioridad atención/prioridad de resolución entre otros).

1. **Convenio 169**

También, respecto al convenio 169 (1989) indica que en la medida de que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y los derechos humanos internacionales reconocidos, deberán:

* Respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los DELITOS cometidos por sus miembros.
* Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre **cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos** en la materia. (El resaltado no pertenece al original).
* Cuando se impongan **sanciones penales** previstas por la legislación general deben tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. (El resaltado no pertenece al original).
* Procurar se trate de **sanciones distintas al encarcelamiento**. (El resaltado no pertenece al original).

1. **Declaración de Naciones Unidas (2007)**

Con la declaración emitida por las Naciones Unidas en el año 2007, se pretende lo siguiente:

* Mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones.
* Perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones.
* Prohíbe la discriminación contra las y los indígenas.
* Promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les conciernen y su derecho a mantener su diversidad.

1. **Declaración Americana sobre derechos de los Pueblos Indígenas OEA (2016)**

Con esta Declaración se establece lo que a continuación se indica:

* La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración.
* Los Estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena.
* Las mujeres indígenas tienen derecho a gozar de sus derechos libres de toda discriminación.
* La violencia contra las personas y los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
* El Estado debe adoptar las medidas necesarias, en conjunto con los pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas.
* Los Estados deben reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas.
* Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuerzos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y judiciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
* Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones, o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a ejercer libremente su espiritualidad y creencias indígenas.
* Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos humanos.
* La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad.
* Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, mantener y promover sus propios sistemas de familia.
* Se reconocerán, respetarán y protegerán las distintas formas indígenas de familia, en particular la familia extensa, así como sus formas de unión matrimonial, de filiación, descendencia y de nombre familiar.
* En asuntos relativos a la custodia, adopción, ruptura del vínculo familia, y en asuntos similares, el interés superior del niño deberá ser de consideración primaria.
* En la determinación del interés superior del niño, las cortes y otras instituciones relevantes deberán tener presente el derecho de todo niño indígena, en común con miembros de su pueblo, a disfrutar de su propia cultura, a profesar y a practicar su propia religión o a hablar su propia lengua, y en ese sentido, deberá considerarse el derecho indígena del pueblo correspondiente, y su punto de vista, derechos e intereses, incluyendo las posiciones de los individuos, la familia, y la comunidad.
* Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
* Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través de sus representantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones.
* Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes.

1. **Reglas de Brasilia (2008) Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de la Personas en Condición de Vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana/Corte Plena Sesión 17-2008) Actualizada en 2019 (Quito, Ecuador)**

Desarrolla los principios recogidos en la *“Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano”* (Cancún 2002) en el título: *“Una Justicia que protege a los más débiles”.*

Tienen como objetivo Garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

Se priorizará el desarrollo de actuaciones destinadas a “*facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas.”* (*Artículo 2, Sección 1*).

Pertenencia a comunidades indígenas: Esta población está en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema judicial estatal. Deben promoverse *“las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o identidad indígenas.”.*

Sobre las Reglas de Brasilia, la Corte Plena en la sesión N° 36-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, Artículo XXIV, se indica lo siguiente: “***4.- Pueblos y Comunidades Indígenas, Personas Afro- descendientes; Pertenencia a otras diversidades étnicas y culturales.*** *(9) Las personas integrantes de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante el sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen, identidad indígena o su condición económica. Los poderes judiciales asegurarán que el trato que reciban por parte de los sistemas de justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, idioma y tradiciones culturales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 48 sobre las formas alternativas y restaurativas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas,* ***propiciando su armonización*** *con los sistemas de administración de justicia estatal.*”.

Respecto a las Reglas de Brasilia, establece los siguientes puntos relevantes para la asistencia legal:

* Asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, sin retrasos innecesarios e incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial.
* En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.

También, las Reglas de Brasilia, indica las siguientes políticas para garantizar la asistencia legal:

* Ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia técnica jurídica.
* Consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados y abogadas todo ello sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar al acceso a la justicia.
* Derecho a personas intérpretes o traductoras: “… no conozca, no hable o no entienda el idioma utilizado en la actuación judicial respectiva… Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones auditivas o de expresión oral. Las interpretaciones orales o en lengua de signos, deberán ser registradas mediante la grabación audiovisual de la manifestación original y de la interpretación, o en su caso documentadas por escrito.”.

Como medidas procesales de las Reglas de Brasilia, se tienen las siguientes:

* Simplificación y divulgación de requisitos.
* Oralidad para favorecer la agilidad.
* Formularios para el manejo fácil.
* Medidas de organización y gestión judicial.
* Agilidad y prioridad.
* Coordinación interinstitucional.
* Medidas de proximidad o acercamiento.
* Resolución de conflictos.

1. **Ley de Biodiversidad**

A continuación, se muestran los artículos de la Ley de Biodiversidad relacionados con la atención especializada que se le debe brindar a las personas usuarias indígenas:

* **Artículo 58**: Respeta la diversidad cultural y dispone la protección de sus costumbres y prácticas.
* **Artículo 66**: Objeción cultural.
* **Artículo 88**: Derechos Intelectuales.
* **Artículo 104:** Asistencia técnica y financiera.

1. **Políticas de Corte Plena y Consejo Superior: Reglas Prácticas 2018**

Consejo Superior (*Sesiones 77-08, 104-09, 61-11, Circulares 123-2013 y 10-09*):

* Audiencias de prueba u otras en el territorio indígena.
* Reserva presupuestaria para cubrir gastos de traslado y viáticos de indígenas por traslado a Despachos Judiciales.
* Atención prioritaria a procesos de personas indígenas.
* Prioridad de trato a personas indígenas que se apersonen a los Despachos.
* Programar audiencias de prueba dentro de un horario accesible a las personas indígenas.
* Establecer canales de comunicación y coordinación para traer al proceso documentos de otras entidades a la mayor brevedad.
* No revictimización de personas indígenas, en especial, mujeres, niños, niñas y adolescentes.
* Colocar distintivos en expedientes.
* Propiciar y colaborar con otras instituciones públicas para que las personas indígenas se incorporen en procesos de enseñanza secundaria y universitaria respetando su propia perspectiva.
* Asignación a personas indígenas de personas intérpretes y traductoras con cargo al presupuesto del Poder Judicial.
* Ordenar a petición de parte o de oficio, costeado por el Estado, peritajes culturales o antropológicos para conocer normas culturales particulares.

1. **Circular 188-19 de Corte Plena: 21 ejes de acción**

La circular 188-19 de la Corte Plena, sesión N° 20-19, celebrada el 27 de mayo de 2019, Artículo XIX, dispuso aprobar los 21 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, que deberán ser desarrollados por las Direcciones del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Gestión Humana, Planificación, Dirección Ejecutiva, Tecnología de la Información, Escuela Judicial y el Sector Jurisdiccional, con ocasión del encuentro realizado entre representantes del Estado y Personas Indígenas Bribri de Salitre y Térraba, en cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (*CIDH*) contra Costa Rica. A continuación, se detallan los mencionados ejes:

1. Concertar con las personas indígenas beneficiarias de las Medidas Cautelares N° 321-12 emitidas por la CIDH contra Costa Rica, las acciones a seguir para garantizar la vida y seguridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre; e informarles las que ya se han adoptado para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a tales medidas para evitar su repetición. Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a los mandatos de la CIDH y construir confianza y diálogo intercultural. En la medida de lo posible, realizar las sesiones de trabajo en los territorios indígenas involucrados, con la colaboración de personas traductoras que faciliten la comunicación efectiva y transparente. Se sugiere valorar sean las principales jefaturas institucionales quienes ejecuten esta labor.
2. Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales vinculadas con la población indígena, establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2019/2024 (*ejes transversales acceso a la justicia y justicia abierta, entre otros*); el efecto posible de tales riesgos, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos a fin de continuar con la adopción de las medidas necesarias para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable. Además, establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar en relación con la tramitación y resolución de los procesos judiciales en los que sean parte pueblos indígenas, priorizando aquellos en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre.
3. Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, normas y procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones vinculadas con los procesos judiciales en los que intervengan personas indígenas, priorizando aquellos en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre.
4. Establecer un sistema de información que permita tener una gestión documental institucional en el desarrollo de las actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados en relación con la tramitación y resolución de los procesos judiciales vinculados en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre.
5. Incluir en las estadísticas institucionales indicadores que visibilicen los procesos judiciales que estén vinculados con personas indígenas, incorporando además información relativa a los pueblos relacionados, los territorios, entre otros datos de interés para la toma de decisiones.
6. Con absoluto respeto al principio de independencia judicial, emitir circulares dirigidas a todas las personas servidoras judiciales en las que se les reitere su deber de ser garantes del acceso efectivo a la justicia de los pueblos indígenas, la no discriminación y eliminación de barreras, a saber: **i)** asegurar que los miembros de la comunidad puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin; **ii)** proporcionar el acceso a los pueblos indígenas y tribales a asistencia técnica y legal en relación con su derecho a la propiedad colectiva, en el supuesto de que estos se encontrasen en una situación de vulnerabilidad que les impediría conseguirla, y **iii)** facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales, o a los organismos encargados de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, así como facilitar la participación de los pueblos en el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, sin que ello les implique hacer esfuerzos desmedidos o exagerados, ya sea debido a las distancias o a las vías de acceso a dichas instituciones, o a los altos costos en virtud de los procedimientos. Además, el otorgamiento de una protección efectiva que tome en cuenta las particularidades propias que los diferencian de la población en general y que conforman su identidad cultural, sus características económicas y sociales, su posible situación de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres, así como su especial relación con la tierra, y respeto de los mecanismos internos de decisión de controversias en materia indígena, los cuales se encuentren en armonía con los derechos humanos, según los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pueblos Kaliña y Lokono versus Surinam, sentencia de 25 de noviembre de 2015 y las disposiciones de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica.
7. Con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros, establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación, vinculación, entrenamiento, evaluación, promoción y acciones disciplinarias; todo de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, en lo relacionado con la aplicación del Derecho Indígena, con el objetivo de ofrecer a las personas usuarias indígenas una justicia pronta, cumplida, sin denegación y accesible; priorizando lo vinculado con los procesos judiciales en los que sean parte miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre.
8. Realizar encuentros entre el pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre con personas funcionarias judiciales de la Contraloría de Servicios, Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, a efecto de que estas últimas les expongan el funcionamiento del Poder Judicial en sus diferentes ámbitos. En forma previa a su ejecución se concertará con las personas indígenas la identificación de los contenidos mínimos de los aspectos sobre los cuales desean ser informados y los mecanismos que ofrece el Poder Judicial para el acceso a la justicia.
9. Realizar encuentros entre representantes del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre y personas funcionarias judiciales con competencia para conocer procesos judiciales vinculados con esa población, a efecto de que las personas indígenas capaciten a las y los servidores judiciales sobre la historia, cosmovisión, costumbres, formas de tenencia y de transmisión de la tierra, entre otros datos de interés, que incidan en la solución de los conflictos indígenas; priorizándose a quienes laboren en las oficinas judiciales con competencia material y territorial para conocer de procesos vinculados con personas indígenas de Buenos Aires de Puntarenas, incluyendo a personas juzgadoras, técnicas y coordinadoras judiciales, defensoras públicas, fiscalas, personal administrativo, del Organismo de Investigación Judicial, entre otros. Iniciar el proceso de capacitación con personas servidoras judiciales de las Jurisdicciones Penal, Agrario y Contencioso Administrativo, de todas las instancias; y luego se continuará con las demás.
10. Verificar que, en los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos:

* Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (*Convenio 107 OIT*), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (*Convenio 169 OIT*), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016;
* Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017,
* Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, entre otras
* Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
* Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas; además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico.

1. Establecer un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de esas capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales que asistan y su concreción en las resoluciones –incluyendo las sentencias- que emitan en los procesos propios de su competencia, con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros. Al respecto, la Institución tiene experiencia pues para tal seguimiento del impacto de la capacitación se diseñó el Manual para realizar las evaluaciones de resultados de la capacitación judicial en el desempeño laboral por parte de la Escuela Judicial.
2. Gestionar ante el Consejo Directivo de la Escuela Judicial y el Consejo Superior para declarar obligatoria la participación de las personas servidoras judiciales en las capacitaciones sobre Derecho Indígena, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, especialmente quienes tengan competencia material y territorial para conocer de procesos judiciales vinculados con el pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre.
3. Llevar un control de las personas que hayan sido capacitadas y un seguimiento para medir el impacto en su gestión, y valorar su inclusión en los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, ya sea para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas.
4. Valorar la posibilidad de establecer acuerdos interinstitucionales entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo (*y sus instituciones*) y el Poder Legislativo, así como las Universidades estatales, a fin de que las acciones que se ejecuten vinculadas con personas indígenas, especialmente las relacionadas con las medidas cautelares de la CIDH, estén previamente coordinadas y sean consultadas a las personas indígenas.
5. Instar al Instituto de Desarrollo Rural y al Ministerio de Justicia y Paz para que valoren la posibilidad de capacitar a las personas juzgadoras, defensoras públicas y fiscalas con competencia para conocer procesos en los que intervengan personas indígenas del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre, sobre las acciones emprendidas en el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas y sistemas catastrales y registrales vinculados.
6. Analizar opciones para brindar protección y seguridad a las personas indígenas beneficiarias de las medidas cautelares, dentro de sus territorios y acordes a sus costumbres (*con pertinencia cultural*).
7. Realizar sesiones periódicas en las que se informe a miembros del pueblo indígena Teribe y Bribrí de Salitre beneficiarias de las medidas cautelares de la CIDH sobre los avances alcanzados.
8. Actualizar el convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica con el objetivo de que incluya la Facultad de Derecho y la Escuela de Antropología para fortalecer el programa de peritajes culturales y de capacitaciones a las personas servidoras judiciales, con posibilidades de establecer acciones conjuntas con otras Escuelas de la UCR que podrían ofrecer insumos importantes en los peritajes culturales.
9. Diseñar una Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial conforme a los lineamientos de MIDEPLAN que sea construida y consultada con las personas indígenas, así como un Plan de Acción de acuerdo a la metodología de la Dirección de Planificación, que contribuya con su ejecución, en seguimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica.
10. Participar como parte del Estado en los encuentros que se realicen entre las personas indígenas beneficiarias de las medidas y otras instituciones del Estado.
11. **Circular 174-17 del Consejo Superior: Personas en vulnerabilidad**

La circular 174-2017 del Consejo Superior aprobada en la sesión N° 84-17 celebrada el 19 de setiembre de 2017, Artículo LXIX, en donde se indica: “*El Consejo Superior les recuerda las circulares emitidas por Corte Plena sobre el acceso a la justicia de las personas en vulnerabilidad social con el fin de que en las salas donde se realizan audiencias orales, se tomen las medidas de infraestructura y operativas que faciliten el acceso efectivo y real a la justicia a esta población.*”.

1. **Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**

Tienen como objetivo ser un enlace entre Corte Plena y el Consejo Superior para mejorar el servicio de la administración de justicia y acceso a la justicia de las personas indígenas.

Se encuentra integrada por una persona representante de Corte Plena y de Consejo Superior, OCRI, Judicatura, Defensa Pública, Fiscalía Indígena, Escuela Judicial, Contraloría de Servicios, Dirección de Planificación, TI, Auditoría Judicial, Dirección Ejecutiva, CACMFJ, Unidad de Control Interno, IIDH, UNA, UCR, PANI, CCSS, TSE, Poder Ejecutivo, ciudadanía, personas indígenas invitadas, entre otros.

La página oficial a la que se puede acceder mediante el siguiente link: [*https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos-indigenas*](https://accesoalajusticia.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos-indigenas), la cual cuenta con una serie de circulares y otro tipo de documentos de sumo interés relacionados con temas atinentes al acceso de la justicia para la población indígena; sin embargo, seguidamente se detallan algunas de las circulares más importantes.

Además se cuenta con la circular 192-2019 del Consejo Superior aprobada en la sesión N° 89-19 celebrada el 15 de octubre de 2019, Artículo LXXXIV, en donde se dispuso acoger la recomendación remitida por la Unidad de Acceso a la Justicia, en oficio CACC-301-2019, del 4 de octubre de 2019, respecto a instar a las personas servidoras judiciales que atiendan procesos vinculados con personas indígenas para que en las resoluciones que emitan en forma escrita u oral y en las audiencias, utilicen un lenguaje claro y sencillo; comprensible para esa población y para las personas traductoras e intérpretes a fin de facilitar el proceso de transmisión de la información

1. **Reglas para el reconocimiento de los honorarios de los intérpretes y traductores del lenguaje de señas costarricense (*LESCO*) y lenguas indígenas**

Circular N° 107-2014 (*modificación de la Circular N° 05-2009*) actualizada en la Circular N° 01-2020 de Consejo Superior.

* Se mantienen las reglas para el nombramiento de peritos e intérpretes por inopia. Se reconoce la tarifa actual de 15.800 colones por hora de traducción o el reajuste anual respectivo.
* El tribunal debe informar a la persona intérprete el tiempo estimado que durará la audiencia y lo dejará constando en el expediente. Si el Despacho, con al menos un día de antelación determina que la diligencia no se realizará y lo comunica a la o el intérprete, no se le pagarán honorarios, lo cual se dejará constando.
* Si se convoca a juicio o diligencia señalada para el día completo, y esta audiencia se suspende, se reconocerán las 8 horas, independientemente del tiempo de interpretación que se haya ejecutado. Si se suspende antes de mediodía, no procede el reconocimiento de gastos de almuerzo.
* Cuando se convoque a una diligencia con una duración inferior a una audiencia dentro de la GAM (*desde Alajuela centro a Cartago centro y desde Acosta hasta San Rafael de Heredia, con excepción de los Despachos ubicados en Desamparados, Alajuelita, San Sebastián, Hatillo, Pavas, Escazú, Goicoechea y su edificio Anexo A y el I Circuito Judicial de San José y sus Anexos A, B, C y D*), adicionalmente al monto de los honorarios por el tiempo de interpretación efectivo, se le reconocerá por concepto de desplazamiento una suma adicional equivalente a una hora de traducción.
* Si se debe asistir a un Despacho ubicado fuera de la GAM, se le reconocerá el tiempo de desplazamiento a razón de 10.000 colones la hora, de ida y regreso, el costo del pasaje de ida y regreso en autobús al sitio del desplazamiento, con base en las tarifas aprobadas por la ARESEP.
* Si la o el intérprete debe pernoctar en el lugar sede del Despacho, con ocasión de la convocatoria, adicionalmente se le reconocerán los gastos de hospedaje, cena y desayuno, durante los días que dure la convocatoria con base en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos.
* La o el perito intérprete incorporado en el Sistema Automatizado de Administración de Peritos, podrá consignar en la factura por los servicios prestados, que los honorarios le sean depositados en determinada cuenta corriente o de ahorro de los bancos estatales, en el supuesto de que no se le giren luego de concluida la diligencia.
* Para agilizar el trámite de los asuntos, la o el intérprete podrá dejar en la Dirección Ejecutiva en sobre cerrado, dirigido a la Oficina Judicial o a la Administración Regional, la documentación que requiere enviar, la que se trasladará mediante las y los choferes de las administraciones al lugar de destino. La Dirección entregará el sobre cerrado y no tendrá responsabilidad por su contenido, debiendo ser vigilante de que este servicio sea utilizado para los efectos dichos únicamente.
* La factura o recibido por los honorarios a cobrar deberá contar con las formalidades del caso y describir la labor realizada, el monto a cobrar y contar con el visto bueno del despacho.

1. **Acuerdo de Consejo Superior sobre Flagrancia**

Consejo Superior sesión 01-2018 de 9 de enero de 2018, Artículo LVII sobre la obligatoriedad de realizar las audiencias en el sitio en procesos de flagrancia en los que participen personas indígenas.

1. **Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos**

*“… el* ***derecho a la identidad cultural*** *es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de* ***garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados*** *sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres* ***y formas de organización****.”*

(*ver: Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, sentencia del 24 de agosto de 2010, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, Caso Yatama Vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005*).”.

1. **Jurisprudencia Sala Constitucional**

*“…para la inscripción de un****indígena****como ciudadano costarricense…* ***la determinación que hagan los dirigentes de la misma sobre la pertenencia o no de una persona al grupo, permitirá su inscripción… aportar el testimonio de dos personas de buenas costumbres.*** *Ello con el fin de que sean las mismas comunidades autóctonas las que definan quienes son sus integrantes, aplicando sus propios criterios y no los que sigue la legislación para el resto de los ciudadanos. De allí que daban respetarse esos criterios y procedimientos para estimar a una persona como miembro de una comunidad****indígena****.” Sala Constitucional, voto 1786-1993.*

*“… es un punto clave cultural de los indígenas que son las personas mayores, es decir de más edad, los que han tenido un papel primordial en la determinación de quien es indígena o no. Así las cosas,* ***no puede de manera arbitraria la Asociación determinar que un solicitante no es indígena, ya que ello según sus costumbres lo determinan los ancianos de la comunidad****.”* Voto 10224-F-2010.

*“Una reserva indígena, es una propiedad agraria originaria y de carácter colectivo, no pudiendo reclamarse sobre ella ningún derecho de propiedad o de posesión individual en perjuicio de la comunidad de pertenencia, siendo su propietario la totalidad de la comunidad, no pudiendo ser desmembrada en propiedad privada precisamente por su naturaleza jurídica destinada a la colectividad. […]”* Sala Constitucional voto 281-2011.

No estimó necesaria la consulta de una ley: *“…tampoco era imprescindible la mención específica de los pueblos indígenas en el texto de la Ley No. 9036, pues, como se ha insistido a lo largo de estas líneas, las reglas que pautan este régimen particular no fueron derogadas con la promulgación de este cuerpo normativo. Así las cosas,* ***al no mediar una afectación directa del régimen de adjudicación, tenencia y, en general, protección de las tierras de los pueblos indígenas, no es posible afirmar que la consulta reclamada se tratara de un trámite esencial dentro del iter legislativo de la Ley No. 9036 de 11 de Mayo de 2012, Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario*** *en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con lo cual la acción de inconstitucionalidad deviene improcedente.”* Sala IV, voto 7579-2013.

*“****Las asociaciones de Desarrollo, como “estructura comunitaria”, son las competentes para disponer de la posesión de la tierra*** *a fin de garantizar el acceso a ella a todos los pobladores indígenas, y en lo que atañe a la propiedad indígena por ser de carácter colectiva, resultan* ***inaplicables las normas sobre derechos individuales*** *para la tutela de la propiedad y la posesión individuales dispuestas en el ordenamiento jurídico al efecto. […]”* Sala I, Voto 297-F-2014.

*“…* ***es la comunidad indígena quien debe establecer cuáles personas son indígenas y quienes no lo son****… Para la determinación de si una persona es indígena o no,* ***es preciso disponer de peritajes culturales antropológicos*** *que con base en la determinación de las costumbres y la cosmovisión de las personas indígenas de un determinado territorio, determinen cuáles personas pueden ser calificadas o no como indígenas.”* Sala Primera, voto 297-F-2014.

*“En esa misma línea, en relación con la protección de la propiedad colectiva indígena y la consecuente tutela de las tradiciones indígenas ancestrales, así como la identidad cultural de estos pueblos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, … la relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios significa que el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en términos más generales… la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad (...) “*Voto 7536-2016.

*“Por la razón anterior, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Corte considera que el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas (...)".* Voto 7536-2016.

*“En efecto, el peritaje cultural aportado a este asunto demuestra que conforme a la costumbre indígena, si bien en la Reserva Indígena Cabécar de Chirripó de Turrialba no está prohibida la unión de personas indígenas y no indígenas, no menos cierto es que no se encuentra permitido que tales parejas vivan y posean tierras dentro del territorio indígena. Tal restricción no es infundada, puesto que contribuye a la preservación de la cultura cabécar, la protección de sus costumbres y su territorio, como bien se explica en el mencionado peritaje cultural.“.* Voto 7536-2016.

1. **Jurisprudencia Sala Primera**

*“…los grupos de personas pertenecientes a las comunidades autóctonas tienen el* ***derecho de vivir en las tierras donde históricamente han estado asentados****, y el Estado debe garantizar plenamente el disfrute de este derecho fundamental…”* Sala I, Voto 297-F-2014.

*“…Reconoce de esa forma, nuestra jurisprudencia constitucional,* ***una jerarquía superior a los Convenios Internacionales, tales como el de la OIT, N° 169*** *(Ley 7316 del 3 de noviembre de 1992), un grado de tutela superior a las personas y comunidades indígenas, es decir, un* ***“nivel elevado de protección”*** *respecto de aquellos derechos humanos contemplados en la propia Constitución Política…”* Sala I, Voto 297-F-2014.

*“...y que por ende exigen* ***el respeto, en los Tribunales ordinarios, de las decisiones que por la vía de la costumbre y la autodeterminación de dichos pueblos indígenas se deriven de las propias comunidades y sus representantes****. […]”* Sala I, Voto 297-F-2014.

*“Sobre la propiedad de las comunidades indígenas. Importante es indicar sobre el* ***carácter colectivo o comunitario de la propiedad indígena****, ya que* ***la pertenencia de ésta no es personal, sino del colectivo*** *como tal. Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia a ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.”* Sala I, Voto 297-F-2014.

*“… los juzgadores, quienes resuelvan el fondo de este asunto, no podrán ser ajenos a los lineamientos antes expuestos, por lo cual se sugiere* ***solicitar un peritazgo cultural antropológico necesario para que, entre otros puntos, se logre determinar con certeza quiénes son las personas indígenas que habitan ese territorio y por ende quiénes no lo son****. De igual manera deberá valorarse la cosmovisión y situación de otras poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas involucradas.”.* Sala I, Voto 297-F-2014.

Todo lo anterior resulta en la necesidad de realizar un análisis histórico estadístico que permita identificar ante un eventual escenario de creación de una jurisdicción especializada en materia indígena, las posibilidades de esta jurisdicción, como lo son su lugar de creación, cantidad de personal, entre otros.

1. **Circular 32-2021 del 17 de febrero de 2021**

La Corte Plena en sesión N° 2-2021, celebrada el 11 de enero de 2021, artículo XXXVIII, aprobó la propuesta de circular para hacer de conocimiento de las personas servidoras judiciales, el contenido íntegro de las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado y la aplicación de la normativa internacional de derechos humanos referida a personas indígenas.

# Metodología de trabajo

A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:

1. Mediante correo electrónico, el 15 de enero de 2021, se le solicita al Licenciado Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública, y a la Licenciada Ligia Jiménez Zamora, destacada en la Supervisión de Personas Indígenas en la Defensa Pública; la información estadística correspondiente a los expedientes y personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública a nivel nacional (*entrados, salidos y circulante*) de octubre 2019 a la fecha; esto con el propósito de contar con el insumo requerido para el estudio del Impacto de Ley a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Pueblos Indígenas. Adicionalmente, a ambos profesionales de la Defensa Pública se les solicita una sesión de trabajo para poder conversar acerca de temas relacionados al estudio.

Mediante la minuta **43-PLA-MI-MNTA-2021** (*Ver anexo 1*) de la reunión virtual sostenida el 25 de enero de 2021, se conocen los cambios que surgieron en la Defensa Pública en el año 2020, con respecto al informe 507-PLA-RH-MI-2020 *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”*. También, se acordó que la información estadística solicita será enviada por el 27 de enero de 2021; ya que dicha data funge como insumo esencial en el estudio técnico de la Dirección de Planificación. Adicionalmente, el 12 de febrero de 2021 el Licenciado Esteban Arguedas y la Licenciada Ligia Jiménez enviaron la información correspondiente a personas usuarias indígenas con corte a enero de 2021, ya que esta información contiene las mejoras implementadas para la recolección de las mismas.

1. Se efectuó una sesión de trabajo, el 01 de febrero de 2021, con personal del Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación; con el propósito de solicitar la información correspondiente a asuntos entrados y activos con personas usuarias indígenas en calidad de intervinientes (*personas actoras y demandadas*) en todas las materias; esto para poder determinar la demanda del servicio en la Defensa Pública, en concordancia a la solicitud de la Licenciada Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de la Defensa Pública; en cuanto a incluir en el estudio las representaciones podrían eventualmente no brindarse, en razón de la falta de personal defensor.
2. De conformidad al informe **507-PLA-RH-MI-2019** de la Dirección de Planificación sobre el *“Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas”* en todas las materias, aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión extraordinaria 38-2020 (*Presupuesto 2021*), celebrada el 17 de abril del año en mención, artículo XXI y, y aprobado por Corte Plena mediante acuerdo del acta31-2020 (*Presupuesto 2021*), artículos I y II; se da seguimiento a las recomendaciones expresas en dicho informe, con el propósito de determinar su cumplimiento.
3. Se efectuó una sesión de trabajo con el Doctor Roberto Montero García, la cual se encuentra respaldada mediante la minuta **71-PLA-MI-MNTA-2021** (*Ver anexo 2*); con e l propósito de determinar el impacto que ha tenido la Ley 9593 de Pueblos Indígenas en materia contenciosa administrativa. Así mismo, el Doctor Montero García envía a la Inga. Hazel Calderón el control que mantiene de los asuntos activos, con corte a enero de 2021.
4. Se efectuó una sesión de trabajo con el Licenciado Mario Rosales, la cual se encuentra respaldada mediante la minuta **73-PLA-MI-MNTA-2021** *(Ver anexo 3*); donde se determinó el impacto que ha tenido la Ley 9593 de Pueblos Indígenas en materia agraria. Así como, aspectos importantes a considerar dentro del presente estudio técnico.
5. Se efectuó una sesión de trabajo con las Licenciadas Sandra Mora Venegas y Ana Briceño York, Supervisoras en Materia de Pensiones Alimentarias y Laboral respectivamente; respaldada por la **78-PLA-MI-MNTA-2021** *(Ver anexo 4)*. En la reunión se determinaron aspectos importantes a considerar en el presente estudio técnico y, se exponen las principales necesidades de la Defensa Pública en las materia alimenticia y laboral.
6. Se efectuó una sesión de trabajo con la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, amparada en la minuta **87-PLA-MI-MNTA-2021** *(Ver anexo 5)*. Como resultado se obtuvo importante insumo relacionado con aspectos cualitativos que la señora magistrada recomienda que la Dirección de Planificación debería considerar en el presente estudio técnico (*impacto de la Ley 9593 en la Defensa Pública*) y, en el informe de presupuesto que se ejecuta de forma paralela, en cuanto a la posible creación de una Jurisdicción Especializada en Materia Indígena. Además, la Magistrada Vargas Vásquez expone los avances que ha tenido la coordinación de la Subcomisión de Acceso a la Justicia en razón de la atención de personas usuarias indígenas.
7. Se participó en la devolución de resultados de la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (*ACNUDH*), la cual se llevó a cabo el 05 de febrero de 2021 mediante la herramienta Microsoft TEAMS y, la Señora Samantha Colli Sulú expone el estudio efectuado en materia indígena en Costa Rica y, emite recomendaciones a considerar en las acciones para el acceso a la justicia a las personas usuarias indígenas.
8. Se participó en la sesión ordinaria del 05 de febrero de 2021 de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Acta 02-2021; donde se conocieron diversos aspectos relacionados con las labores sustanciales de la subcomisión. Importante indicar que, durante la sesión de trabajo, la Contraloria de Servicios del Poder Judicial expuso el informe *“Análisis para la simplificación del trámite de ayudas económicas a personas indígenas”*, del cual se tomó nota y se recibe retroalimentación de los participantes en la reunión.
9. Se efectuó una sesión de trabajo el 09 de febrero de 2021 mediante la herramienta Microsoft Teams, con los Señores Erick Alfaro y Carlos Romero, de la Contraloría de Servicios de San José y Pérez Zeledón, respectivamente; donde los profesionales señalan aspectos experiencias vividas con la atención de personas usuarias indígenas, así como posibles variables cualitativas a considerar, en razón de las gestiones que han tramitado en sus oficinas.
10. Se consulta a la Dirección de Gestión Humana el acuerdo del Consejo Superior que aprueba la creación de la plaza de Supervisión de Asuntos Indígenas de la Defensa Pública, con el propósito de conocer las condiciones bajo las cuales se creó la citada plaza.

# Información relevante

## Análisis de datos estadísticos de la Defensa Pública

Tal como se mencionó en el apartado **V. Metodología** del presente informe, en el proceso de recopilación de datos estadísticos, se solicita al Lic. Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública, y a la Licda. Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Asuntos de Pueblos Indígenas; la información estadística de la cantidad de personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública en asuntos nuevos, de octubre de 2019 a setiembre de 2020; así como también, la cantidad de procesos activos (*circulante*) y asuntos terminados al cierre de setiembre de 2020 por cada una de las oficinas a nivel nacional. Es importante aclarar que, se solicita la información estadística con dichos cortes en razón de que la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas entró en vigencia en setiembre de 2018; en ese sentido, se analizan años naturales completos.

En cuanto a los datos suministrados por la Defensa Pública, se encuentra la cantidad de procesos (*expedientes*) activos al cierre de setiembre de 2020, así como la cantidad de expedientes que ingresaron de octubre 2019 a setiembre 2020 y la cantidad de personas usuarias indígenas representadas en dichos asuntos. **Ver apéndice 1.**

Al efectuar el análisis de datos estadísticos suministrados por la Defensa Pública, la Ingeniera Hazel Calderón Mata, Profesional de la Dirección de Planificación, detecta inconsistencias que fueron abordadas con la Licenciada Ligia Jiménez Zamora, Supervisora en materia indígena de la Defensa Pública. Al no encontrar explicación, se confirma con el Licenciado Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; que corresponde a errores de tabulación en cuanto a los asuntos activos (*circulante*), el reporte de asuntos entrados si corresponde a la realidad. Es por esto que, en 10 de febrero de 2021, se envía nuevamente el reporte de asuntos activos a nivel nacional, donde interviene una persona usuaria indígena. **Ver apéndice 2.**

### Personas indígenas representadas por proceso judicial (*expediente*)

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de personas usuarias indígenas en calidad de intervinientes (*actores o demandados*) en promedio por cada proceso judicial, con base en la entrada que se obtuvo en la Defensa Pública (*a nivel nacional*) de octubre de 2019 a setiembre de 2020:

Tabla 1

Promedio de personas usuarias indígenas en calidad de intervinientes, en los procesos entrados en la Defensa Pública de octubre 2019 a setiembre de 2020, según materia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materia** | **Cantidad de expedientes entrados** | **Cantidad de personas usuarias indígenas** | **Promedio de personas usuarias indígenas por expediente** | **Diferencia** |
| Penal | 210 | 264 | 1,3 | 54 |
| Agraria | 73 | 85 | 1,3 | 12 |
| Contravencional | 20 | 23 | 1,2 | 3 |
| Penal Juvenil | 23 | 24 | 1,0 | 1 |
| Penalización de violencia  contra la mujer | 56 | 57 | 1,0 | 1 |
| Pensiones Alimentarias | 345 | 345 | 1,0 | 0 |
| Laboral | 53 | 53 | 1,0 | 0 |
| Ejecución de la Pena | 4 | 4 | 1,0 | 0 |
| Ejecución Penal Juvenil | 2 | 2 | 1,0 | 0 |
| **Total** | **786** | **857** | **1,1** | **71** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Con base en la tabla anterior, se puede observar que, un proceso (*expediente*) mantiene en promedio 1,1 personas usuarias indígenas como intervinientes, en los cuales hay 71 personas usuarias indígenas en calidad de interviniente en procesos donde hay dos o más personas indígenas intervinientes.

Haciendo la segregación por materia, se evidencia que, de los asuntos que ingresaron de octubre de 2018 a setiembre 2019, la materia penal mantiene la mayor proporción de cantidad de personas usuarias indígenas por expediente (**1,3**); es decir, hay 54 personas usuarias indígenas que se mantienen en procesos con dos o más intervinientes. Aunado a lo anterior, materia agraria y contravencional mantiene un promedio de 1,2 personas usuarias indígenas por proceso, pero 12 y 3 personas, respectivamente, se mantienen en asuntos con dos o más intervinientes. Las demás materias mantienen una persona indígena interviniente por cada expediente, lo anterior implica que sólo en casos atípicos (*poco recuentes*) es que una persona usuaria indígena interviene en un expediente con dos o más intervinientes.

Es importante resaltar que, este comportamiento **se mantiene constante en el tiempo**, ya que la Dirección de Planificación ha realizado dos informes técnicos (*el 634-PLA-RH-MI-2019 y el 507-PLA-RH-MI-2020*) donde se infiere científicamente el promedio de personas usuarias indígenas que interviene por cada proceso, desde que se promulgó la Ley 9593.

Ahora bien, se tiene como excepción algunos asuntos conocidos dentro de la Defensa Pública, donde la Supervisora de Asuntos Indígenas indica que intervienen gran cantidad de personas usuarias indígenas y por ello, se toma en consideración dentro del análisis actual. Sin embargo, con base en el informe 634-PLA-RH-MI-2019, el informe 507-PLA-RH-MI-2020 y el presente análisis estadístico, se infiere técnicamente que dichos expedientes responden a casos aislados y se encuentran fuera de los límites de control, debido a que en el amplio periodo de tiempo de estudio no se refleja el comportamiento descrito (*desde que entró en vigencia la Ley 9593*).

### Análisis de la entrada de asuntos (*expedientes*)

Con base en la data estadística facilitada por la Administración de la Defensa Pública el año anterior (*informe de presupuesto del año anterior: 507-PLA-RH-MI-2020*) y la información suministrada el presente año, se analiza el comportamiento de la entrada de asuntos por materia, para el primero año de entrada en vigencia de la Ley 9593 (*de octubre 2018 a setiembre 2019*) y, para el segundo año (*de octubre 2018 a setiembre 2019*).

Es importante aclarar que, en consulta al Licenciado Esteban Arguedas Madrigal, Coordinador de la Unidad Estadística de la Defensa Pública; la información refiere a la entrada de asuntos que siempre ha sido competencia del servicio de la Defensa Pública, no contemplan los asuntos propios del impacto de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas. Lo anterior debido a que la Administración de la Defensa Pública cuenta con la imposibilidad de calcular dicha información, únicamente cuenta con las fórmulas estadísticas para determinar asuntos activos (*circulante*) al cierre de un mes especifico.

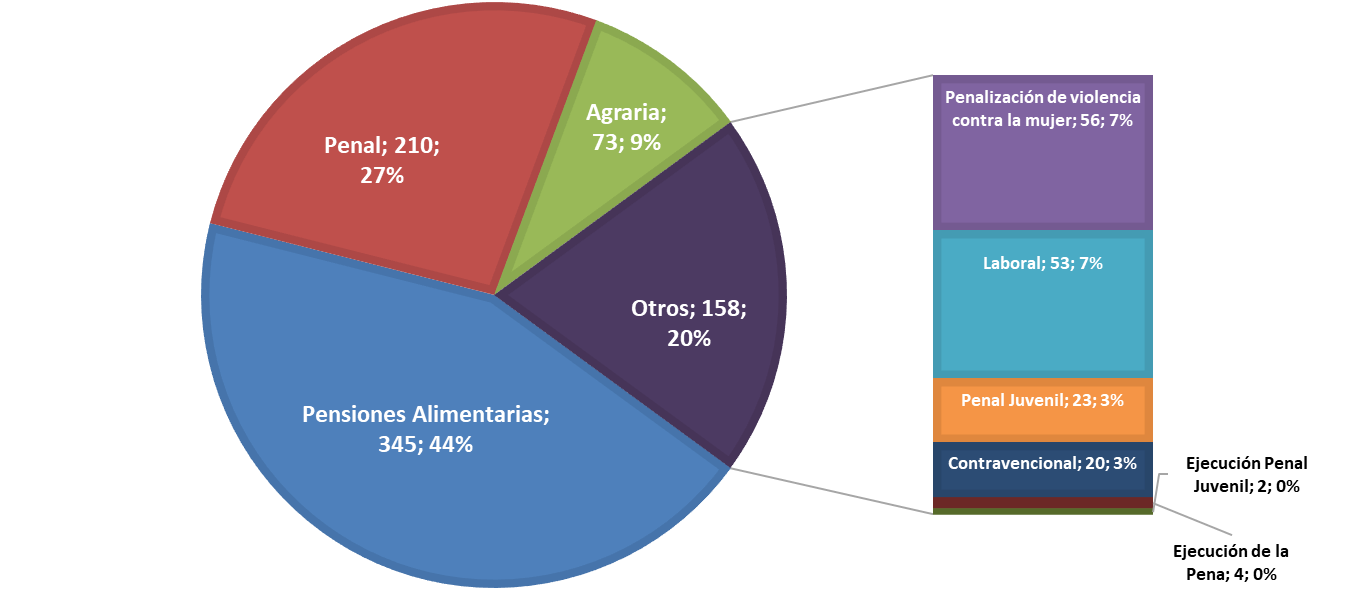
Adicionalmente, es importante señalar que, dado a que los datos entrados corresponden a las materias que atendía la Defensa Pública antes de la promulgación de la Ley 9395 de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se extrae del análisis los expedientes reportados de “*Familia*”, ya que dicha materia corresponde a las nuevas responsabilidades impuestas por la ley en mención y, esta es una de las inconsistencias detectadas por la Dirección de Planificación durante el análisis de la información. **Ver apéndice 2**.

Con la intención de conocer dónde se concentra la mayor proporción de asuntos entrados en la Defensa Pública por materia, en la siguiente figura se ilustra la cantidad de procesos (*expedientes*) entrados en el segundo año posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas (*de octubre 2019 a setiembre 2020*):

Figura 1

Proporción de los asuntos entrados en la Defensa Pública, en el segundo de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas año

(*de octubre 2019 a setiembre 2020*), segregado por materia



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

La figura anterior instruye la concentración de asuntos entrados por materia, en el segundo año de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas (*de octubre 2019 a setiembre 2020*); donde se observa que el 80% de la entrada de asuntos se concentra en tres materias: Pensiones Alimentarias (***44%***), Penal Ordinario (***27%***) y Agrario (***9%***). El restante 20% que corresponde a la entrada del segundo año considera las materias encasilladas como “Otros” en la figura anterior, las cuales son: Penalización, Laboral, Penal Juvenil, Contravencional, Ejecución Penal Juvenil y Ejecución de la Pena (*adultos*).

Es importante hacer mención que, en el informe de presupuesto del año anterior (*507-PLA-RH-MI-2020*) se obtuvo el mismo comportamiento en cuanto a la concentración del 80% de la totalidad de los asuntos entrados por materia. En ese sentido, se comprueba estadísticamente que la demanda de la Defensa Pública en la atención de las personas usuarias indígenas en calidad de interviniente se mantiene especialmente en materia alimenticia, penal y agraria.

Por otra parte, a nivel general, de la información suministrada por la Defensa Pública se puede extraer que, para el primero año posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas (*de octubre 2018 a setiembre de 2019*) ingresaron 1117 expedientes donde figura una persona usuaria indígena en calidad de interviniente y, para el segundo año posterior (*de octubre 2019 a setiembre de 2020*) ingresaron 786 expedientes; siendo el comportamiento decreciente con una diferencia de 331 expedientes. Esta baja en la entrada de asuntos en la Defensa Pública podría estar asociada con las propias medias sanitarias adoptadas por los líderes indígenas en los diversos pueblos, esto a raíz de la emergencia nacional que enfrentamos producto de la enfermedad provocada por el COVID-19.

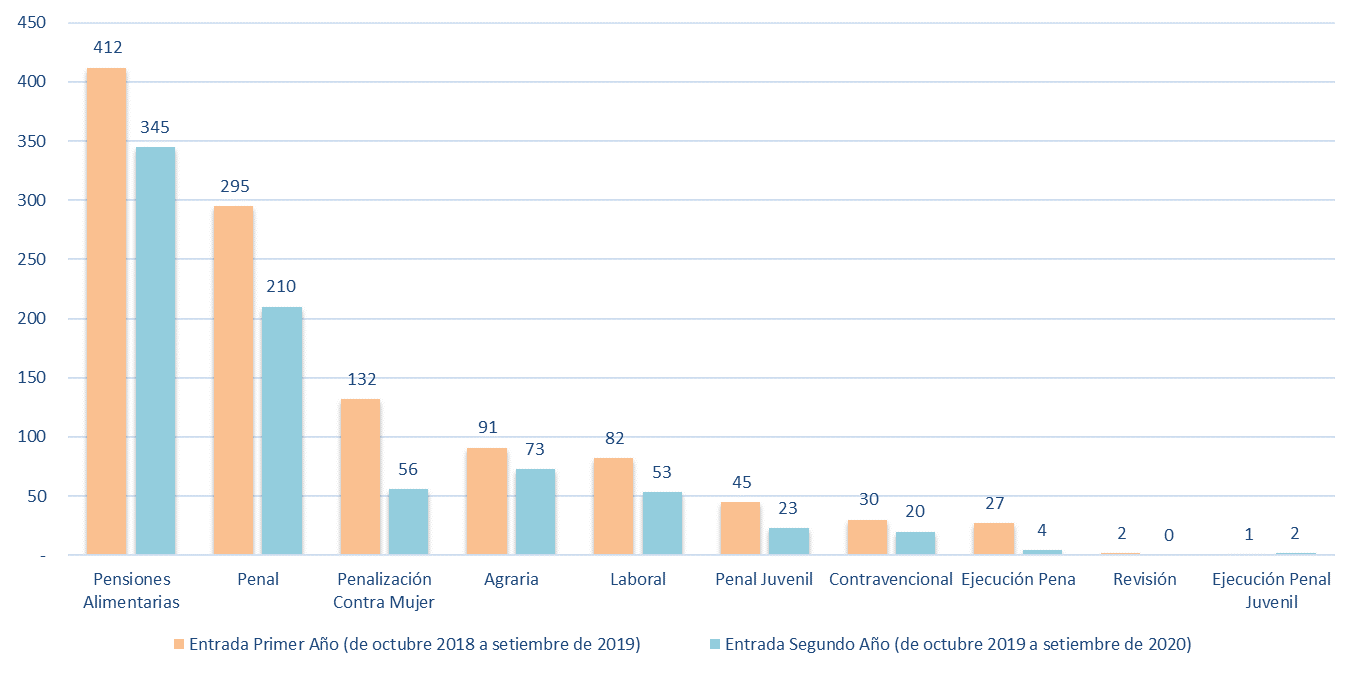
La siguiente figura se muestra el comportamiento de la cantidad de asuntos entrados por materia, para el primer y segundo año posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

Figura 2

Comportamiento de la entrada de asuntos con persona usuaria indígena,

en el primer y segundo año posterior a la entrada en vigencia de la

Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Dado que en el segundo año natural posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9593 el comportamiento genérico de los asuntos entrados fue al decrecimiento, se segrega por materia la cantidad de asuntos entrados, con el propósito de determinar si corresponde a un comportamiento genérico o bien, si hubo un comportamiento distinto en alguna de las materias estudiadas.

En la figura anterior se observa que el comportamiento al decrecimiento es un factor común entre todas las materias en estudio, donde la única materia que reporta más cantidad de asuntos entrados en el segundo año es “*Ejecución Penal Juvenil*”, sin embargo, la entrada corresponde a 1 asunto para el primer año y 2 para el segundo año.

Ahora, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de asuntos entrados por oficina de la Defensa Pública y por materia, en el segundo año posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

Tabla 2

Cantidad de asuntos entrados por oficina de la Defensa Pública, en el segundo año posterior a la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas (*de octubre 2019 a setiembre 2020*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Pensiones**  **Alimentarias** | **Penal** | **Agraria** | **Demás materias** | **Total** |
| Buenos Aires | 46 | 114 | 25 | 67 | 252 |
| Bribrí | 125 | 20 | 24 | 26 | 195 |
| Pérez Zeledón | 30 | 13 | 4 | 7 | 54 |
| Corredores | 27 | 11 | 7 | 7 | 52 |
| Coto Brus | 18 | 21 |  | 5 | 44 |
| Turrialba | 19 | 13 | 1 | 4 | 37 |
| Cartago | 20 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| Golfito | 14 | 6 | 6 | 3 | 29 |
| Limón | 16 |  |  | 8 | 24 |
| **Demás oficinas** | **30** | **11** | **4** | **31** | **76** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Las oficinas que se muestran en la tabla anterior corresponden al 90% de la totalidad de asuntos entrados a nivel nacional y, las materias que se muestran son las que equivalen el 80% de la entrada (*como se evidenció anteriormente*).

De la figura anterior se puede observar que la mayoría de asuntos entrados se concentra en la oficina de la Defensa Pública de Buenos Aires y en Bribri, seguido de las oficinas de Pérez Zeledón y Corredores (*ambas en la zona sur*). Además de que es interesante que la mayoría de asuntos entrados se concentren en la zona sur, es importante reflejar que en Buenos Aires prevalecen los asuntos penales, mientras que en Bribri los asuntos alimentarios.

Los asuntos agrarios se distribuyen principalmente en Buenos Aires y Bribri, en las demás oficinas la entrada anual es inferior a los 10 expedientes.

En cuanto a los 87 expedientes clasificados en “*Otras materias*” en la oficina de Buenas Aires, 26 corresponden a asuntos de Penalización, 10 de materia laboral, 16 de Penal Juvenil y 19 de contravencional. A excepción de los asuntos laborales, estos son atendidos por recargo por el personal defensor penal.

Finalmente, observamos que en circuito de Cartago (*Turrialba y Cartago*) ingresaron 60 asuntos en el periodo en estudio; donde predominó la entrada de asuntos alimentarios (*65% de los asuntos entrados con persona usuaria indígena*).

### Análisis de asuntos activos (*expedientes*)

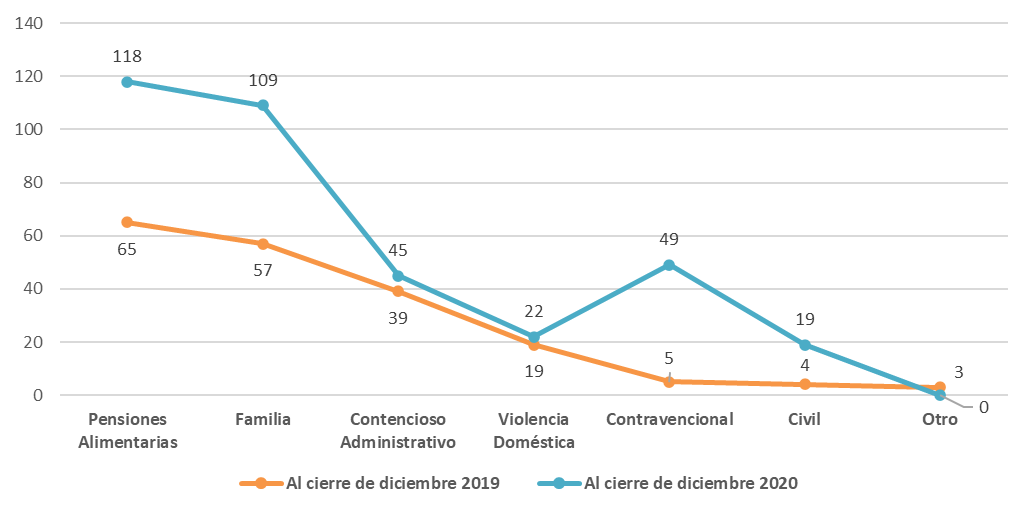
Como se explicó anteriormente, ante la imposibilidad de que la Administración de la Defensa Pública suministre la data de asuntos entrados en razón de la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, en el análisis de asuntos entrados no se evidencia el impacto real en la entrada producto a la ampliación de responsabilidades en razón de la citada ley. Sin embargo, la Defensa Pública si suministró la cantidad de asuntos activos con persona usuaria indígena en las materias que siempre han sido parte del servicio de la institución y, los asuntos activos que corresponden al impacto de ley.

Es importante aclarar que, en el estudio técnico de plazas, la Dirección de Planificación considera como insumo esencial el movimiento de los asuntos en los despachos (*asuntos* *entrados y salidos*), ya que permite este indicador permite calcular las cargas de trabajo reales de las personas servidoras judiciales. La cantidad de asuntos activos es un indicador importante para la medición de mora judicial y otros aspectos; sin embargo, no permite medir la cantidad real de expedientes tramitados, ya que depende de la duración de los procesos judiciales y, el objetivo es progresivamente disminuir la duración de los mismos, en concordancia a la misión de nuestra institución: “*Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el desarrollo sostenible del país*”. Dada la explicación anterior, posteriormente se analizarán los asuntos entrados en el área jurisdiccional y se estimará la demanda de la Defensa Pública, en razón de los datos estadísticos de los despachos jurisdiccionales.

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de los asuntos activos (*circulante*), reportado en la Defensa Pública en razón del impacto real producto de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

Figura 3

Comportamiento del circulante reportado por la Defensa Pública (*a nivel nacional*), en razón de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

En total, para el cierre de diciembre de 2019 se reporta un total de 192 expedientes en razón de las nuevas obligaciones de la Defensa Pública, producto de la promulgación de la Ley 9593, mientras que para el cierre de diciembre se reportan 362 asuntos; siendo que el comportamiento a nivel general ha sido al crecimiento (*170 expedientes más que el año anterior*).

Haciendo el análisis por materias, donde se observa mayor incremento es en materia alimenticia (*representación de personas usuarias demandadas*), seguido de Familia, que por recargo es atendido por el personal de Pensiones Alimentarias. En ese sentido, como se explicó anteriormente, se estimará la demanda del servicio de la Defensa Pública más adelante, con base en los datos del área jurisdiccional.

En cuanto a materia contenciosa, se observa un crecimiento de 6 expedientes activos. De hecho, ese comportamiento casi constante fue descrito por el Doctor Roberto Montero García mediante la minuta 71-PLA-MI-MNTA-2021 del 01 de febrero de 2021; ya que el Doctor Montero García explicó que debido a la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-29 percibe que la entrada de asuntos contenciosos disminuyó y, que hubo poco movimiento en su circulante, en razón de la suspensión de audiencias y diligencias y, cierres de zonas indígenas.

Los asuntos de Violencia Doméstica, por la dinámica actual de trabajo del personal defensor, son asumidos por las Defensoras y Defensores Públicos de Materia Penal (*especialmente en los responsables de la tramitación de asuntos de Penalización*); es por esto que los 22 expedientes se encuentran distribuidos en los defensores penales a nivel nacional.

Finalmente, como se explicó en el informe 507-PLA-RH-MI-2020 (*impacto de Ley 9593 para el presupuesto del año 2020*) los 3 asuntos clasificados como “***Otros***” responden a una Querella y representaciones en materia de Tránsito; mismos que se asumen concluyeron, debido que el circulante al cierre de diciembre de 2020 no se reportan.

Ahora, en la siguiente figura se muestran los asuntos activos al cierre del 31 de enero de 2021, donde interviene al menos una persona usuaria indígena en las materias donde la Defensa Pública brindaba el servicio antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

Tabla 3

Asuntos activos donde interviene una persona indígena, en las materias donde la Defensa Pública brindaba el servicio profesional antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Penal** | **Pensiones Alimen-tarias** | **Agrario** | **Penalización** | **Laboral** | **Penal Juvenil** | **Ejecución de la Pena** | **Total** |
| Buenos Aires | 350 | 84 | 74 | 25 | 19 | 39 |  | **591** |
| Bribrí | 363 | 102 | 13 | 35 | 33 |  |  | **546** |
| Turrialba | 75 | 18 | 8 |  | 1 | 12 |  | **114** |
| Limón | 25 | 1 | 21 | 23 | 7 | 7 | 5 | **89** |
| Coto Brus | 56 | 12 |  | 17 |  |  |  | **85** |
| Corredores | 20 |  | 17 |  |  | 11 |  | **48** |
| Guatuso | 12 | 1 | 29 |  | 1 |  |  | **43** |
| Cartago | 3 | 1 | 37 |  |  |  |  | **41** |
| Demás oficinas | 58 | 15 | 19 | 8 | 29 | 10 | 9 | **148** |
| **Total** | **962** | **234** | **218** | **108** | **90** | **79** | **14** | **1705** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

Las oficinas que se segregan en la tabla anterior representan el 90% de la totalidad de asuntos activos con persona usuaria indígena reportados a nivel nacional. Y, las materias mostradas, a diferencia de la ***Tabla 2***, corresponde al servicio que la Defensa Pública siempre ha brindado a los ciudadanos, no manifiesta las nuevas obligaciones impuestas por la Ley 9593.

Como era de esperarse, debido al análisis realizado en cuando a la entrada de asuntos por materia, más del 80% de los asuntos activos (*circulante*) se concentra en materia penal, alimenticia y agraria. Y, como era de esperarse, las oficinas donde se concentran lo asuntos activos con persona usuaria indígena son Buenos Aires y Bribri.

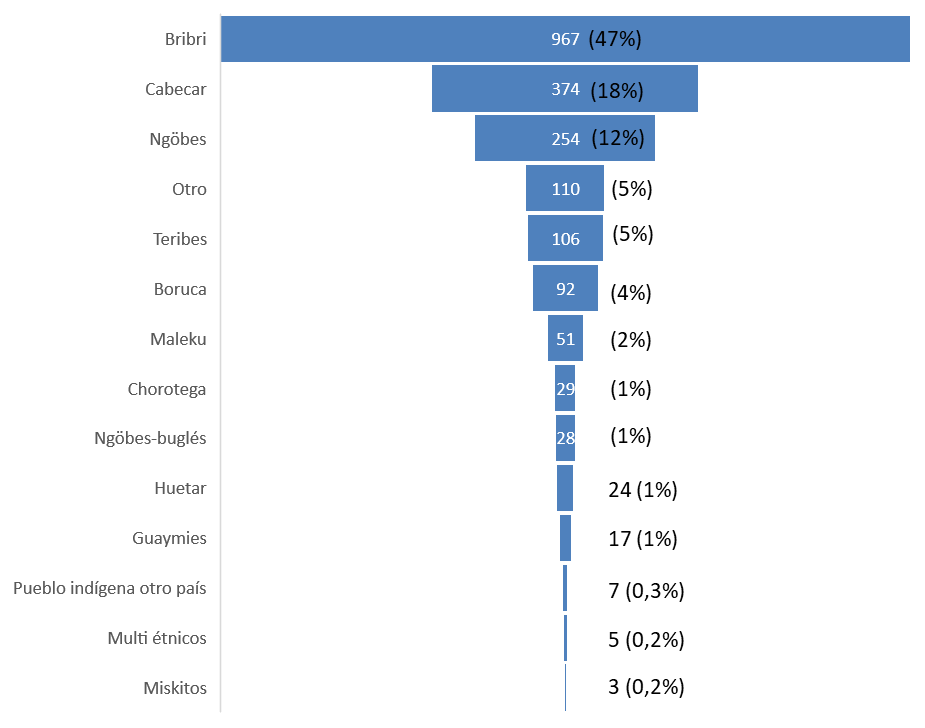
Es importante observar que, aunque en Bribri la entrada de asuntos alimentarios es más alto que en materia Penal; los asuntos activos son más en penal, lo que podría estar asociado directamente a la duración en la resolución de los procesos judiciales o bien, a la actualización del circulante reportado por el personal defensor. Esta situación no se refleja en Buenos Aires, ya que la entrada de asuntos de la oficina es mayor en materia penal que en materia alimentaria y, la cantidad de asuntos activos es congruente a la entrada, siendo superiores los asuntos penales a los alimentarios.

En cuanto a los asuntos activos reportados en materia agraria, la mayoría de asuntos activos se reportan en Buenos Aires (***34%***), donde existe una plaza creada para tal fin (*Ver antecedentes*). En Penal Juvenil, se observa que la mayoría también se concentran en Buenos Aires (***49%***), seguido por Turrialba y Corredores. En materia laboral, la concentración de asuntos activos está en Bribri (***37%***), seguido de la oficina de Buenos Aires.

Por otra parte, la siguiente figura muestra la cantidad concentración de personas usuarias indígenas que mantienen un proceso activo en la Defensa Pública al cierre de enero de 2021, por pueblo indígena al que pertenecen. Es importante mencionar que la información que se muestra a continuación fue recolectada por la Supervisión de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública, en coordinación de Estadística de la Defensa Pública; donde inclusive se tuvo que solicitar colaboración el personal técnico judicial para poder inventariar todos los expedientes activos de cada oficina, para obtener el dato de las personas usuarias indígenas en el circulante a nivel nacional. **Ver apéndice 3**.

Figura 4

Proporción de personas usuarias indígenas que mantienen un proceso (*expediente*) activo al cierre de enero 2021, según pueblo de procedencia



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

En total, la Defensa Pública reporta 2067 asuntos activos al cierre de enero de 2021 con una persona usuaria indígena en calidad de interviniente a nivel nacional; los cuales se clasificaron en la figura anterior según el pueblo de procedencia.

Como se observa en la figura anterior, el 47% (*967 personas*) de las personas indígenas que representa la Defensa Pública provienen del pueblo Bribri, seguido del pueblo Cabécar que representa un 18% (*374 personas*) y Ngöbes que representa un 12% (*254 personas*); que en total esos tres pueblos de procedencia equivalen al 77% de las personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública, al cierre de enero 2021. Esta información funge como insumo importante para el banco de personas intérpretes, los cuales son requeridos para la participación de personas indígenas en procesos judiciales.

Finalmente se aclara que, las personas indígenas que se categorizan en “***Otro***”, según la Licenciada Ligia Jiménez Zamora, Supervisora de Asuntos de Pueblos Indígenas; son personas que se autodenominan indígena, pero por estrategia no indican el pueblo de su procedencia. Estas personas que no indican su pueblo de procedencia representan el 5% de las personas indígenas representadas al cierre de enero 2021 (*110 personas usuarias*).

Ahora, en la siguiente tabla se muestra la distribución de las personas usuarias indígenas que fungen como intervinientes en procesos activos al cierre de enero de 2021, segregado por el pueblo procedencia y oficina de la Defensa Pública.

Tabla 4

Distribución de la cantidad de personas indígenas en procesos activos,

según pueblo de procedencia, al 31 de enero 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Bribri** | **Cabecar** | **Ngöbes** | **Otro** | **Teribes** | **Boruca** | **Demás pueblos** | **Total** |
| Buenos Aires | 318 | 86 | 0 | 97 | 99 | 81 | 38 | **719** |
| Bribri | 504 | 62 | 54 | 5 | 0 | 0 | 10 | **635** |
| Turrialba | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **132** |
| Coto Brus | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | **99** |
| Corredores | 9 | 1 | 69 | 0 | 2 | 0 | 15 | **96** |
| Demás oficinas | 134 | 93 | 34 | 8 | 5 | 11 | 101 | **386** |
| **Total** | **967** | **374** | **254** | **110** | **106** | **92** | **164** | **2067** |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

La tabla anterior segrega las oficinas que representan el 81% de las personas usuarias indígenas, de los asuntos activos al cierre de enero 2021.

Como se infirió anteriormente, el 77% de las personas usuarias indígenas representadas por la Defensa Pública se concentra en tres pueblos de procedencia: Bribri, Cabécar y Ngöbes y, de la tabla anterior se infiere que dichas representaciones se ubican principalmente en Buenos Aires, Bribri y Turrialba.

En cuanto a las personas indígenas provenientes del pueblo Bribri, se observa que 134 de ellas están catalogadas en “*Demás oficinas*”, de las cuales 31 están reportadas en la Defensa Pública de Limón, 43 en San José, 33 en Cartago, 7 en Pérez Zeledón, 1 en Osa, 3 en Batán, 8 en Pococí, 6 en Goicoechea y 2 en Alajuela.

Respecto a las personas indígenas provenientes del pueblo Cabécar, se reportan su mayoría en la Defensa Pública de Turrialba (*35%*), seguido de Buenos Aires (2*3%*) y Bribri (17*%*). No obstante, hay 94 personas (*25%*) que mantienen asuntos en otras oficinas: 60 personas en Limón, 5 en Cartago, 6 en Pérez Zeledón, 12 en Batán, 12 en Pococí y en Goicoechea, 3 en Siquirres y 1 en Alajuela, Heredia y Liberia.

Es de interés resaltar que, de las 110 personas que no indicaron su pueblo de procedencia por estrategia, 97 de ellas se ubican en la Defensa Pública de Buenos Aires, 3 en Pérez Zeledón, 4 en Osa y 1 en Alajuela. Además, se resalta que las personas provenientes de Teribes, Boruca y de los demás pueblos, se ubican en su mayoría en Buenos Aires.

Finalmente, la siguiente tabla muestra la cantidad de personas indígenas por pueblo de procedencia, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (*INEC*) del año 2011 (*versión más reciente*).

Tabla 5

Proporción de personas indígenas según el censo del INEC del 2011,

según pueblo de procedencia

|  |  |
| --- | --- |
| **Pueblo** | **Proporción de personas indígenas** |
| Bribri | 36% |
| Cabécar | 35% |
| Ngöbe o Guaymí | 10% |
| Brunca o Boruca | 7% |
| Huetar | 4% |
| Teribe o Térraba | 4% |
| Chorotega | 3% |
| Maleku o Guatuso | 1% |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos obtenidos de la página oficial del INEC.

Tal y como se observa en la tabla anterior, la mayor cantidad de personas que se autodenominan indígenas habitan en los pueblos de Bribri, Cabécar y Ngöbe, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el año 2011 (*más reciente*); lo cual es congruente a la concentración de la cantidad de personas representadas por la Defensa Pública en procesos judiciales.

## Análisis de datos estadísticos del área jurisdiccional y representación de la Defensa Pública

La Ley 9593 de Acceso a la justicia de Pueblos Indígenas (*Alcance N°174*) en el **Artículo 7- Asistencia letrada y gratuidad de la justicia**, menciona literalmente:

*“En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora publica especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita.”.*

Aunado a la indicación de la citada ley, se considera la resolución N°2020010431 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde se le ordena a la persona coordinadora de la Defensa Pública de San Vito de Coto Brus realice las gestiones pertinentes para que, de forma inmediata, se verifique si la persona que interpuso el recurso de amparo cuenta con los medios económicos para sufragar patrocinio letrado y, si carece de los mismos, nombrarle una persona defensora que le represente en el proceso alimenticio. Lo anterior debido a que **el artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias** no realiza distinción alguna en cuanto a la parte actora a quien se le debe brindar la asistencia legal y, solo establece, a especie de requisito o condición para proveerlo que la parte interesada o solicitante carezca de recursos para sufragarlo, en cuyo caso debe ser demostrado previamente.

Es por las dos razones anteriores que, en el presente apartado se analizará a nivel nacional los asuntos con persona usuaria indígena y, la representación de la Defensa Pública cuenta; con el propósito de determinar si se cuenta con el personal defensor requerido para la atención de personas indígenas, según las cuotas que se han definido por la Dirección de Planificación en los diversos estudios técnicos y, las particularidades cualitativas de la atención de esta población que en su mayoría se encuentra en condición de vulnerabilidad.

En la siguiente figura se muestra el ingreso promedio mensual, con base en la información del área jurisdiccional (*incluyendo juzgados, tribunales, salas y Centro de Conciliación*) para el año 2019 y 2020, obtenida de la herramienta SIGMA, en coordinación del Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación; segregada por materia la demanda en los procesos judiciales de las personas usuarias indígenas. Es importante aclarar que, los datos que se muestran a continuación son preliminares, por lo que podrían eventualmente sufrir variaciones seguido del control de calidad que la Dirección de Planificación efectúa, ya que aún no se ha concluido el proceso para el año 2020; sin embargo, por experiencias de años anteriores, los profesionales del subproceso indican que las diferencias suelen no ser significativas.

Además, es importante aclarar que la información que se obtuvo de SIGMA corresponde es un reflejo fidedigno de lo alimentado en los sistemas judiciales, según cada despacho y sin ningún tipo de alteración, es por esto que, si se detectara que en alguno de los despachos judiciales la cantidad de expedientes con persona indígena no corresponde a la realidad, la responsabilidad de la actualización constante y correcta la data de los sistemas informáticos (*en el momento en que se generen las gestiones*) corresponde al despacho judicial, así como la revisión regular de los sistemas para detectar los datos que pudieran faltar y procurar su inclusión; en concordancia con las circulantes emitidas por el Consejo Superior 160-2016, 133-2018, 15-2019 y 94-2019. **Ver anexo 8**.

Figura 5

Ingreso promedio mensual por materia segregados por materia,

de los expedientes con persona usuaria indígena reportados

por el área jurisdiccional a nivel nacional

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con obtenidos mediante SIGMA, en coordinación con el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación.

El grafico de Pareto mostrado en la figura anterior permite inferir que el 86% de la totalidad de los asuntos entrados con persona usuaria indígena a nivel nacional se concentran en cuatro materias: Penal (*106 expedientes mensuales*), Violencia Doméstica (*36 expedientes mensuales*), Faltas y Contravenciones (*26 expedientes mensuales*) y Pensiones Alimentarias (*26 expedientes mensuales*). El restante 14% de la totalidad de asuntos entrados se estima sean en promedio 34 expedientes mensuales a nivel nacional, distribuidos en los diversos despachos de las siguientes materias: Penal Juvenil, Familia, Laboral, Tránsito, Agrario, Civil, Cobro Judicial, Constitucional, Conciliación, Contencioso Administrativo, Notariado, Niñez y Adolescencia y Disciplinario.

Como se evidenció en la ***Figura 1***, el 80% de los asuntos entrados en la Defensa Pública se concentran en tres materias: Pensiones Alimentarias, Penal y Agrario. Sin embargo, dicha proporción varía en el área jurisdiccional, donde predominan los asuntos penales, violencia doméstica, contravencionales y alimentarios. Es importante mencionar que los asuntos contravencionales y de Violencia Doméstica son asumidos por recargo por el personal defensor penal.

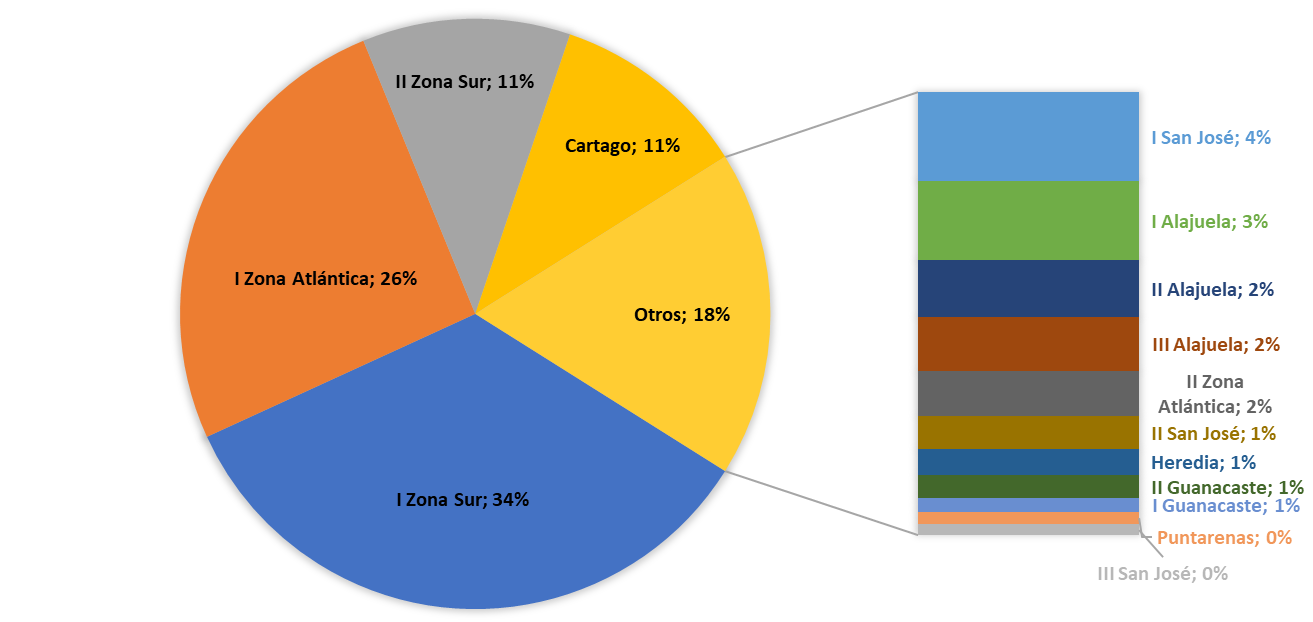
Dada la explicación anterior, el esfuerzo técnico del presente informe se enfocará en las materias de mayor representación, tanto en área jurisdiccional como en Defensa Pública; siendo estas materias: **Penal, Violencia Doméstica, Contravencional, Agrario y Pensiones Alimentarias**, así como la dinámica de trabajo para el personal defensor, dada a las colaboraciones que se brindan a otras materias y entre oficinas. Adicionalmente, se analizarán las cargas de trabajo de la plaza responsable de la tramitación de asuntos contenciosos administrativos con persona usuaria indígena y servidora judicial (*con hechos relacionados en sus funciones públicas*), dado a que como se explicó en el apartado **I. Antecedentes**, dicha plaza se trasladó de la Secretaría de Género a la Defensa Pública, precisamente para la atención de los asuntos anteriormente mencionados.

Ahora, los asuntos entrados en el área jurisdiccional con persona usuaria indígena en calidad de interviniente se clasificaron según el circuito judicial al que pertenecen y se muestran en la siguiente figura:

Figura 6

Representación de la entrada de asuntos con persona usuaria indígena

reportados por el área jurisdiccional a nivel nacional



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, obtenidos mediante SIGMA, en coordinación con el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación.

Tal y como se muestra en la figura anterior, el 82% de la totalidad de asuntos entrados a nivel nacional, según el reporte del área jurisdiccional; se concentra en cuatro circuitos judiciales: Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (*34%*), Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (*26%*), Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (*11%*) y Circuito Judicial de Cartago (*11%*). El restante 18% de asuntos entrados se distribuyen en los demás circuitos judiciales del país.

Esta información del área jurisdiccional es congruente al reporte estadístico de la Defensa Pública, ya que como se indicó anteriormente, los asuntos con persona usuaria indígena se concentran en la zona sur, caribe sur y Turrialba. Y, la proyección de la demanda de la Defensa Pública, con respecto a la data del área jurisdiccional se enfocará en las materias antes mencionadas (*de mayor representación en la Defensa Pública y en el área jurisdiccional*) y, en los circuitos de mayor atención de personas indígenas a nivel nacional.

### Atención de asuntos penales, violencia doméstica y contravencionales

La atención de asuntos penales, violencia doméstica y contravencionales se analizan en conjunto ya que son asumidos por recargo por el personal penal de cada una de las oficinas de la Defensa Pública. **Ver anexo 9**.

Los asuntos contravencionales han sido asumidos por el personal defensor penal desde antes de la promulgación de la Ley 9593 para la parte acusada, el impacto de ley radica en que se le tiene que brindar representación a la parte contraventora. Y, los asuntos de violencia doméstica forman parte de las nuevas obligaciones de la Defensa Pública en razón de la Ley 9593, por tal sólo se les brinda el servicio a personas usuarias indígenas.

Dado a que el presente informe tiene como objetivo medir el impacto que se obtuvo con la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, se analizarán los cuatro circuitos judiciales que representan el 82% de la totalidad de asuntos a nivel nacional y, las cargas de trabajo del personal defensor responsable de la tramitación de los asuntos considerando la carga de trabajo actual y, la adquirida por recargo.

Tabla 6

Entrada promedio mensual de asuntos penales, violencia domestica

y contravenciones, de las oficinas que representan el 82% de la entrada

total, de asuntos con personas usuarias indígenas



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos de los Anuarios Judiciales y, los del área jurisdiccional obtenidos mediante SIGMA, en coordinación con el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación.

Las columnas “*Ingreso promedio mensual (penal y penalización, todos los usuarios)*” y “*Entrada promedio mensual contravencional (todos los usuarios)*” se calcularon con base en los datos oficiales de los Anuarios Judiciales de la Defensa Pública, esta data considera todos los asuntos entrados (*con personas usuarias indígenas y no indígenas*), ya que siempre han sido usuarias y usuarios de la Defensa Pública; con el propósito de determinar la entrada promedio mensual del personal defensor en materia penal.

Las columnas “*Entrada promedio mensual contravencional con persona indígena (área jurisdiccional)*” y “*Entrada promedio mensual de Violencia Doméstica con persona indígena (área jurisdiccional)*” se infirió estadísticamente con base en la información histórica extraída con SIGMA, en coordinación con le Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación.

Es importante aclarar que, podría haber expedientes que se estén cuantificando duplicados, debido a que en materia contravencional la Defensa Pública brinda el servicio independientemente si es una persona usuaria indígena o no y, en los Anuarios Judiciales no es posible visibilizar de esa entrada cuántos procesos judiciales corresponden a personas indígenas. Sin embargo, para el cálculo de la entrada promedio mensual se considera el peor escenario, por lo tanto, se adiciona la entrada de la Defensa Pública y del área jurisdiccional, como si el personal defensor hoy no atendiera personas indígenas en asuntos contravencionales, lo cual sabemos es falso.

Además, es importante mencionar que cada una de las oficinas de la Defensa Pública puede presentar variaciones conforme a la dinámica interna que se adopte por parte de la coordinación, sin embargo, a nivel general la información anterior nos permite tener noción de la entrada de cada una de las personas defensoras y de la posible necesidad de recurso humano en razón de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

En sesión del Consejo Superior 5-2019, artículo XXII, del 23 de enero de 2019, se tuvo por rendido el informe 1507-PLA-MI-2018, relacionado con el “*Modelo de Tramitación de la Defensa Pública”*; donde se recomienda una serie parámetros de referencia en cuanto a la estructura organizacional de las oficinas de la Defensa Pública, asuntos entrados por persona defensora, entre otros aspectos en materia penal. Es por esto que, a pesar de que el modelo de tramitación no considere recargos de otras materias, nos permite aproximar las cargas de trabajo con base en los datos estadísticos y en los abordajes que ha efectuado la Dirección de Planificación en las oficinas de la Defensa Pública, en razón del Proyecto Mejora Integral del Proceso Penal. En ese sentido no se detectan variables cuantitativas que afecten la operativa de las oficinas en estudio, sin embargo, la Defensa Pública de Cartago se mostró en el cuadro anterior debido a que el análisis se realizó por circuitos, pero como se detectó en el abordaje corto que se realizó en la oficina, se debe realizar un análisis a profundidad de las cargas de trabajo de la oficina como parte del Proyecto Mejora Integral del Proceso Penal, debido a que se encuentra fuera del alcance del presente informe técnico, ya que la oficina de Cartago reporta un único expediente entrado de setiembre de 2019 a octubre 2020, con persona usuaria indígena en calidad de interviniente; en efecto la concentración de procesos judiciales con persona usuaria indígena se concentran en la zona de Turrialba.

### Atención de asuntos agrarios

En la reunión con el Licenciado Mario Rosales Vargas, Defensor Público Coordinador de Materia Agraria, sostenida el 01 de febrero de 2021 mediante la minuta 73-PLA-MI-MNTA-2021 (*ver anexo 3*); el Señor Rosales Vargas menciona que las personas usuarias indígenas siempre han sido atendidas por el personal defensor agrario y, con la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas el verdadero impacto no fue en materia agraria, sino en las materias que por recargo han sido asumidas por el personal defensor agrario (*civil, cobro y problemas arrendaticios*). Como se mencionó anteriormente en el apartado **III. Antecedentes**, el personal defensor agrario funge como co-defensa en asuntos contenciosos administrativos; sin embargo, la carga de trabajo sustancial recae sobre la plaza en la que actualmente se destaca el Doctor Roberto Montero García.

A pesar de que el Licenciado Mario Rosales Vargas, Defensor Público Coordinador de Materia Agraria, menciona que la carga de trabajo no ha sido exorbitante para las personas defensoras agrarias; en este apartado se analizará si ha habido aumento en el 2020 la demanda del personal defensor, con respecto a los años anteriores. **Ver anexo 10**.

Con base en los datos de los Anuarios Judiciales para los años 2017, 2018 y 2019 y, la información suministrada por la Coordinación Agraria para el año 2020; en la siguiente figura se ilustra el comportamiento de los asuntos entrados, terminados y el circulante en materia agraria a nivel nacional.

Figura 7

Comportamiento de los asuntos entrados, terminados y

activos de la materia a nivel nacional, del año 2017 al 2020

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos de los Anuarios Judiciales y, facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

En cuanto a los asuntos entrados se observa que, en los primeros tres años la tendencia fue al crecimiento, siendo esto congruente con el recurso humano otorgado, ya que como se mencionó en el apartado **III. Antecedentes** del presente informe técnico, en el año 2018 se otorgaron siete plazas de persona defensora agraria (*la Defensa Pública ahora cuenta con 17 personas defensoras en total a nivel nacional*) para la colaboración en la descongestión de Tribunales Agrarios y, en el 2019 se determinó que dichas plazas son requeridas para la demanda ordinaria de la Defensa Pública y por tal, para el 2020 cambiaron su condición de “extraordinaria” a “ordinaria”. No obstante, para el año 2020 se observa un decrecimiento en la entrada de asuntos, siendo la diferencia de 120 expedientes a nivel nacional. Es por esto que, no se detectan variables cuantitativas que afecten significantemente la demanda del personal defensor agrario a nivel genérico.

Respecto al reporte del área jurisdiccional se tiene el reporte de 57 expedientes entrados con persona usuaria indígena para el 2019 y, 40 para el 2020 a nivel nacional; siendo el promedio de ingreso mensual de 49 asuntos. Esta data es informativa, debido a que como se explicó anteriormente, las personas indígenas ya contaban gozan de representación letrada y gratuita antes de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

Aunado a lo anterior, el mismo comportamiento al decrecimiento de los asuntos entrados se observa en los asuntos terminados; ya que para el 2020 se reportan 177 expedientes terminados menos que en el año anterior.

Respecto a la relación de asuntos salidos y entrados, el indicador supera el 100% en los dos primeros en estudio (*108% para el 2017 y 101% para el 2018*), pero para los dos siguientes años este indicador es de 78% y 73%, respectivamente. Al estar este indicador por debajo del 100% para los dos últimos años, se espera y se justifica el comportamiento al crecimiento del circulante (*aumentó en 741 asuntos activos, del 2019 al 2020*); debido a que ingresaron más cantidad de asuntos de los que se terminaron.

La afectación en el comportamiento del trabajo en el 2020 podría estar directamente relacionada a la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19, ya que, en procura de respetar las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud, la administración de justicia limitó el desarrollo de audiencias y diligencias.

En cuanto a los asuntos activos, la Coordinación de Materia Agraria facilita el reporte del circulante al cierre de diciembre de 2020, los cuales se muestran a continuación:

Figura 8

Asuntos activos por persona defensora de materia agraria,

al cierre de diciembre de 2020

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

La figura anterior segrega los 3210 expedientes que se reportan activos al cierre de diciembre de 2020, en materia agraria a nivel nacional. Además, la figura anterior muestra el circulante de 16 recursos de persona defensora en materia agraria, ya que, en consulta al Licenciado Mario Rosales Vargas, Coordinador de Materia Agraria de la Defensa Pública, su persona no tramita asuntos directamente, sino que brinda colaboración a los profesionales que lo requieran. **Ver apéndice 10**.

En el informe 634-PLA-RH-MI-2019 del impacto de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas se indica se le consultó a la Coordinación de Materia Agraria de la Defensa Pública un circulante aceptado para el personal defensor, el cual se definió como parámetro de referencia en 180 expedientes. En ese sentido, la figura anterior muestra que Cartago, Puntarenas, Limón, Guápiles, San Carlos, Upala y Nicoya se encuentran por encima de la recomendación de la coordinación. Sin embargo, como se evidenció anteriormente, no hubo un incremento en la entrada de asuntos para el año 2020, con respecto a años anteriores; entonces el incremento mostrado en el circulante se debe propiamente a las disposiciones de la Administración de Justicia en cuanto a la suspensión de audiencias y diligencias, por la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19.

### Atención de asuntos contenciosos administrativos

En la reunión con el Doctor Roberto Montero García sostenida el 01 de febrero de 2021 (*minuta 71-PLA-MNTA-2021, ver anexo 2*), se acuerda que el Señor Montero García enviará a la Dirección de Planificación el Libro de Registro de su plaza; esto con el propósito de realizar el análisis del impacto de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas.

Es importante recordar que, como se mencionó en el apartado **III. Antecedentes** del presente informe, por disposición de la Jefatura de la Defensa Pública es el Doctor Montero García quién asume la representación de personas usuarias indígenas y servidoras judiciales en asuntos contenciosos administrativos; funciones que en principio eran encomendadas a la plaza que se trasladó de la Secretaría Técnica de Género.

Con base en el Libro de Registro enviado por el Doctor Roberto Montero se reporta el ingreso de 35 expedientes para el 2020, los cuales equivalen a 52 personas usuarias representadas, ya sea servidoras judiciales o indígenas. Analizando los datos, hay cuatro expedientes que reportan más de una persona usuaria representada (*uno alcanza 10 personas usuarias, otro expediente 6, otro 3 y otro 2*); los restantes 31 expedientes entrados reportan una única persona usuaria representada. **Ver anexo 11**.

Otra observación importante es que, en los datos entrados del 2020, 31 de los 35 expedientes del Libro de Registro tienen fecha de ingreso *01/01/2020* y por tal, se deduce que corresponde a los asuntos con los que inicia sus funciones el Doctor Roberto Montero, ya que precisamente es en ese año donde asume la representación por disposición de la Jefatura de la Defensa Pública. Excluyendo dichos asuntos, según el Libro de Registro, se puede decir que en el año 2020 ingresaron cuatro expedientes, los cuales representan a seis personas usuarias.

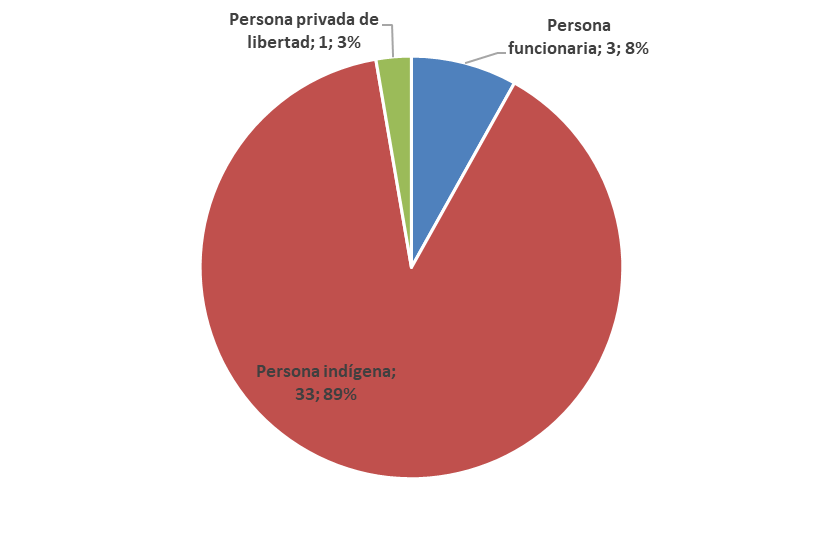
Para el mes de enero de 2021, se reportan dos expedientes entrados que equivalen a dos personas usuarias representas; una de ellas es persona indígena y, la otra es servidora judicial.

Respecto a los asuntos activos, la siguiente figura ilustra la cantidad de expedientes activos al cierre de enero 2021, segregados por el tipo de persona usuaria representada.

Figura 9

Asuntos contenciosos administrativos activos al cierre de enero 2021,

segregados por tipo de persona usuaria representada



**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por el profesional que tramita asuntos contenciosos administrativos, en la Defensa Pública.

En total, al cierre de enero 2021 se reportan 37 expedientes contenciosos administrativos activos; de los cuales el 89% (*33 expedientes*) tienen al menos una persona indígena en calidad de interviniente, el 8% (*3 expedientes*) corresponde a asuntos de personas servidoras judiciales y, hay un expediente que se reporta con persona usuaria privada de libertad, pero no se indica si es persona indígena o servidora judicial.

Como se mostró en la ***Figura 5***, al cierre de diciembre 2020 se reportaban 45 asuntos contenciosos administrativos activos; en ese sentido, se puede inferir que en enero 2021 se terminaron 10 expedientes (*recordar que se reporta el ingreso de dos asuntos*).

Además, es importante hacer resaltar que 89% de expedientes asumidos por el Doctor Roberto Montero mantienen personas indígenas en calidad de intervinientes y, como mencionó el Señor Montero García en la reunión del 01 de febrero de 2021; debido que la mayoría de las personas indígenas se encuentran en condición de vulnerabilidad, la complejidad de los asuntos es alta; máxime que él se traslada a los pueblos indígenas para la atención de dichas personas usuarias. Estos procesos judiciales, en cumplimiento de su legislación, son asuntos que requieren co-defensa y, en el caso de los procedimientos con persona usuaria indígena la co-defensa recae por recargo sobre el personal agrario, por disposición de la Jefatura de la Defensa Pública. Sin embargo, el Doctor Roberto Montero indica que no representa carga de trabajo para el personal agrario, debido a que la totalidad de la tramitología es asumida por su persona. Este criterio técnico coincide con lo indicado por el Licenciado Mario Rosales, Coordinador de Materia Agraria de la Defensa Pública; mediante la minuta 73-PLA-MN-MNTA-2021. Aunado a esto, el Doctor Montero García exterioriza que la co-defensa de asuntos contenciosos administrativos debería ser asumida por el personal defensor de la Unidad Administrativa de la Defensa Pública y no por el personal agrario, debido a naturaleza profesional, criterio que está siendo estudiado por la Dirección de Gestión Humana; sin embargo, en consulta con la Señora Silvia Cascante Rueda, profesional de Gestión Humana, al 12 de febrero de 2021 no se ha emitido un criterio al respecto, ya que el estudio de los perfiles competenciales se detuvo en razón del cambio reciente de la Jefatura de la Defensa Pública.

Es importante indicar que por la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19, el Doctor Montero García indicó en la sesión de trabajo del 01 de febrero de 2021 que, la tramitación de asuntos se vio afectada por las disposiciones propias de la administración de justicia en cuanto a la suspensión de audiencias y diligencias.

Finalmente, con base en los datos estadísticos del área jurisdiccional, obtenidos mediante la herramienta SIGMA en coordinación con el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación; para el año 2019 se reporta el ingreso de tres asuntos contenciosos con persona usuaria indígena y, para el año 2020 se reporta el ingreso de un asunto; para un promedio de ingreso anual de dos asuntos. **Ver anexo 8**.

### Atención de asuntos alimentarios

Con base en la reunión con la Licenciada Sandra Mora Venegas, Supervisora de Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública, sostenida el 02 de febrero de 2021 (*minuta 78-PLA-MNTA-MI-2021, ver anexo 4*); con la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas el impacto en materia alimentaria radica en la representación de las personas indígenas demandadas, donde anteriormente no se brindaba el servicio. Además de que, el personal defensor de Pensiones Alimentarias asume el recargo de la representación de asuntos de Familia donde intervenga una persona usuaria indígena.

Aunado a esto, la Licenciada Sandra Mora Venegas expone de zonas puntuales donde hay carencia de personal defensor en la materia; tal como es el caso de Puerto Jiménez, donde una persona usuaria (*no indígena*) solicitó defensa pública y tuvo que ser atendida por el profesional de Golfito. Este caso de Puerto Jiménez, según consulta a la Licenciada Mora Venegas, ingresó el 20 de junio de 2020 y al 18 de febrero de 2021 se encuentra en estado “*En trámite*”, pero probablemente se registré en la oficina de Golfito, debido a que la oficina de Puerto Jiménez no reporta asuntos entrados de Pensiones Alimentarias en el año 2020, según los datos suministrados por el Licenciado Esteban Arguedas, Estadístico de la Defensa Pública.

Además, la Licenciada Mora Venegas mencionó el caso de Coto Brus indicado en el apartado **III. Antecedentes**, donde una persona usuaria (*no indígena*) interpuso un recurso de amparo contra la Defensa Pública al negarle la posibilidad de ser representada de forma gratuita, esto precisamente por la carencia de personal defensor especialista en la materia alimenticia. De hecho, en Coto Brus los asuntos de Pensiones Alimentarias son atendidos por el personal penal por recargo, no obstante, su prioridad es materia penal y por tal, siempre que les es posible, atienden asuntos alimenticios.

También la supervisión de Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública indica que como oficina critica la Defensa Pública de Turrialba, debido a que el profesional se traslada a Juan Viñas (*días que no se brinda el servicio alimenticio en Turrialba, por falta de personal*) y debe recibir colaboración de Cartago para la representación de personas indígenas demandadas; misma situación de Guatuso, que recibe colaboración de Upala.

Es importante resaltar que, en reiteradas ocasiones durante la sesión del 02 de febrero de 2021, la Licenciada Mora Venegas indica su preocupación debido a las personas indígenas que no han podido iniciar un proceso judicial por desconocimiento de los servicios de la Defensa Pública, mismos que podrían ser divulgados en las visitas a las zonas indígenas, labor sumamente importante que se ha dejado de realizar debido a la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19 y, por la carga de trabajo del personal defensor.

Por lo anterior es que, en este apartado se analizarán las cargas de trabajo del personal defensor de Pensiones Alimentarias, segregando a las personas usuarias indígenas en calidad de intervinientes y, se analizará la posible carga de trabajo si se aumenta el servicio a todas las personas usuarias indígenas, según lo reportado por el área jurisdiccional a nivel nacional.

En la siguiente tabla se muestran las oficinas de la Defensa Pública que representan el 80% del total de la entrada de asuntos alimentarios, según se explicó en la ***Tabla 2***, así como las oficinas con las que interactúa (*se brinda o recibe colaboración*) y las oficinas que mencionó la Licenciada Mora Venegas presentan situación crítica. **Ver anexo 12.**

Es importante aclarar que, el Licenciado Esteban Arguedas Madrigal, Estadístico de la Defensa Pública, suministró la información preliminar de los Anuarios Judiciales correspondiente a los primeros tres trimestres del 2020, por lo que para el cálculo de la entrada promedio anual se proyectó el cuatro trimestre del 2020 y, para los años anteriores se tomó la data oficial de los Anuarios Judiciales del Poder Judicial.

Tabla 7

Entrada promedio anual por persona defensora de Pensiones Alimentarias, según oficina de la Defensa Pública

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Entrada DP prom anual (*todos los usuarios*)** | **Cantidad de personas defensoras** | **Entrada promedio por persona defensora** | **Entrada promedio anual jurisdiccional (*todos los usuarios*)** | **Representación DP, respecto al reporte del área jurisdiccional (Entrada Defensa /Entrada Jurisdiccional)** |
| Pérez Zeledón | 821 | 4 | 205 | 863 (6) | 95% |
| Osa | 1 |  |  | 275 (1) | 0% |
| Golfito | 205 | 1 | 205 | 249 (4) | 81% |
| Corredores | 445 | 1 | 445 | 453 (8) | 97% |
| Coto Brus | 19 |  |  | 311 (18) | 6% |
| Buenos Aires | 186 |  |  | 339 (100) | 42% |
| Puerto Jiménez | 0 |  |  | 111 (1) | 0% |
| Upala | 310 | 1 | 457 | 420 (1) | 52% |
| Guatuso | 147 | 171 (4) |
| Cartago | 1595 | 5 | 319 | 1883 (2) | 69% |
|  |
| 431 (1) |
| Turrialba | 478 | 1 | 478 | 521 (21) | 70% |
| 135 (2) |
| Tarrazú | 0 |  |  | 164 (1) | 0% |
| Limón | 961 | 3 | 474 | 1014 (10) | 95% |
| Bataán | 461 | 463 (3) |
| Bribrí | 377 | 1 | 377 | 304 (88) | 96% |

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

La cifra que se encuentra dentro de paréntesis en la columna “*Entrada promedio anual jurisdiccional (todos los usuarios)*” indica la cantidad de procesos judiciales con personas indígenas respecto a la entrada total. Por ejemplo, para la oficina de Pérez Zeledón se reporta un ingreso promedio anual de 863 asuntos alimenticios, de los cuales 4 son con persona indígena en calidad de interviniente.

En los datos del área jurisdiccional se consideró los asuntos entrados principales, debido a que el presente análisis es enfocado en determinar la representación de la Defensa Pública con respecto a los diferentes despachos y, bajo el supuesto de que todas las personas indígenas requieren del servicio gratuito. En la memoria de calculo adjunto en el apartado **X. Anexos** se aprecia el detalle de la interacción de las oficinas de la Defensa Pública con el área jurisdiccional, ya que personas defensoras que atienen la demanda de varios juzgados por la dinámica de colaboración que se ha adoptado.

Primero, para analizar las cargas y la dinámica de trabajo de la zona sur (*primer y segundo circuito judicial*) se tiene que, la oficina de Pérez Zeledón (*Defensa Pública I Circuito Judicial Zona Sur*) atiende por recargo los asuntos entrados de Buenos Aires, ya que una persona defensora se traslada dos días por semana y otra persona defensora se traslada un día para atender los intereses contrapuestos; dicha carga de trabajo se traduce en un promedio de ingreso anual promedio por persona defensora de 252 expedientes anuales, sin embargo, hay que recalcar que al no contar un recurso de persona defensora la oficina de Buenos Aires brinda el servicio de Pensiones Alimentarias únicamente dos días por semana. La oficina de Golfito y de Corredores mantiene una persona defensora, que tiene un ingreso mensual de 205 y 445, respectivamente; estando el profesional de Corredores por encima de la entrada promedio anual recomendada. Las oficinas de Osa y Coto Brus no cuentan con personal defensor alimentario.

Aunado a esto, se extrajo la información correspondiente al área jurisdiccional y se infiere estadísticamente que, de la entrada los juzgados que tramitan asuntos de Pensiones Alimentarias con los que interactúan las oficinas de la Defensa Pública del Primer y Segundo Circuito de la Zona Sur, el 5% de los expedientes tienen al menos una persona usuaria indígena en calidad de interviniente y, es a esta población a la que se debería brindar representación gratuita cuando son demandados. Este porcentaje se traduce en aproximadamente 136 expedientes anuales, donde 100 de ellos son reportados por el Juzgado Contravencional de Buenos Aires (materia Pensiones Alimentarias). Y, por recargo las plazas de Pensiones Alimentarias han asumido la representación de personas usuarias indígenas en asuntos de Familia, donde el Juzgado Civil, Trabajo Y Familia de Buenos Aires (*materia Familia*), el Juzgado De Familia Y Violencia Doméstica del II Circuito Judicial De La Zona Sur (*Corredores*) (*materia Familia*) y, el Juzgado Civil, Trabajo Y Familia De Osa (materia Familia) reportan 28, 7 y 2 asuntos entrados en promedio al año, respectivamente.

Segundo, para analizar la dinámica de trabajo de las oficinas de Guatuso y Upala, se tiene que la persona defensora de Upala se traslada a Guatuso para la atención de la demanda de la zona, siendo la entrada promedio anual de 310 asuntos para la Defensa Pública de Upala y de, 147 asuntos para Defensa Pública de Guatuso; para un promedio anual de 457 expedientes, estando por encima de la entrada recomendada para una Defensora o Defensor Público de Pensiones Alimentarias. Asimismo, el Juzgado Contravencional de Upala (*materia Pensiones Alimentarias*) y, el Juzgado Contravencional de Guatuso (*materia Pensiones Alimentarias*) reportan una entrada promedio anual de 420 y 171 asuntos, respectivamente, donde 1 y 4 de ellos tienen al menos una persona usuaria indígena en calidad de interviniente (*menos del 1% de la entrada*).

Tercero, para analizar las cargas de trabajo del circuito de Cartago se tiene que, la oficina de Cartago cuenta con cinco personas defensoras en materia alimentaria y, Turrialba cuenta con una. También, Cartago brinda colaboración a Turrialba para la atención de personas indígenas demandadas. El Juzgado Contravencional de Cartago reporta en promedio una entrada de 1883 asuntos, donde 2 de ellos tienen al menos una persona indígena en calidad de interviniente. El Juzgado Contravencional de Turrialba (*materia Pensiones Alimentarias*) y el Juzgado Contravencional de Jiménez (*materia Pensiones Alimentarias*) reportan en promedio una entrada anual de 521 y 135 asuntos, respectivamente, donde 21 y 2 de ellos son con persona usuaria indígena. Aunado a esto, Juzgado Familia, Penal Juvenil Y Violencia Doméstica De Turrialba (*materia Familia*) reporta el ingreso anual promedio de cinco expedientes con persona usuaria indígena. La entrada promedio anual de la Defensora o Defensor Público de Turrialba es de 478 asuntos, estando por encima de la recomendada. Y, el personal defensor de Cartago reporta en promedio una entrada anual de 319 asuntos, inferior a la recomendada; sin embargo, se tiene que considerar que un profesional se traslada a la oficina de Turrialba.

Cuarto, para analizar la atención de asuntos del Primer Circuito de la Zona Atlántica es importante aclarar que, la oficina de Limón cuenta con tres personas defensoras en materia alimentaria y la oficina de Bribri cuenta con una. También, hay que considerar que una persona defensora de Limón se traslada a Bribri para colaborar con la representación de personas usuarias indígenas demandadas y, otra persona defensora se traslada a Matina para brindar el servicio en la zona (*a todas las personas usuarias*). En cuanto a la entrada del área jurisdiccional se tiene que, el Juzgado Contravencional de Bribri (*materia Pensiones Alimentarias*) reporta un ingreso promedio anual de 304 asuntos, donde 88 de ellos cuenta con persona usuaria indígena (*requiere doble representación: actores y demandados*) y, se estima que un 96% de la entrada jurisdiccional es atendido por la representación pública. El Juzgado Contravencional del I Circuito de la Zona Atlántica (*materia Pensiones Alimentarias*) y el Juzgado Contravencional de Matina (*materia Pensiones Alimentarias*) reportan 1014 y 304 asuntos entrados en promedio anuales, respectivamente, donde 10 y 3 son con persona usuaria indígena. Respecto a la carga de trabajo de las cuatro personas defensoras, las tres plazas de Limón reportan un ingreso anual promedio de 474 asuntos, estando por encima de lo recomendado y, hay que considerar que estas plazas se trasladan para colaborar a otras oficinas y que mantienen el recargo de los asuntos de Familia de personas usuarias indígenas (*10 expedientes en promedio por año*). En ese sentido, se detecta la necesidad de una plaza de persona defensora para la atención de personas usuarias indígenas demandadas en la zona, tal y como se recomendó en el informe 507-PLA-RH-MI-2020; esta plaza se estima que tenga un promedio de ingreso anual de 101 asuntos con persona usuaria indígena en calidad de demandado, estando por debajo de la entrada recomendada.

### Atención de asuntos laborales

Con base en la reunión con la Licenciada Ana Briceño Yock, Supervisora en Materia Laboral de la Defensa Pública, sostenida el 02 de febrero de 2021 mediante Microsoft Teams (*minuta 78-PLA-MI-MNTA-2021*); la Licenciada Briceño Yock indica que el impacto de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas en materia laboral en la Defensa Pública radica en que, la citada ley le da acceso a toda persona usuaria indígena a representación letrada y gratuita, sin distinguir si es persona empleadora o trabajadora. El artículo 454 del Código de Trabajo señala que se le brinda el servicio a la persona trabajadora con excepción de las Infracciones a la Ley de Trabajo que, si se le brinda el servicio a la parte empleadora, por el artículo 672 inciso 5 del Código de Trabajo. Ahora con la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, se le debe brindar el servicio a toda persona indígena empleadora.

Aunado a lo anterior, la Licenciada Briceño Yock ejemplificó el caso de una Junta Directiva de una escuela que se encuentra ubicada dentro de una zona indígena en la zona de Buenos Aires de Puntarenas, denominados como patronos, a los cuales se les brindó asistencia letrada y gratuita por parte de la Defensa Pública.

En cuanto a la cantidad de personas defensoras representadas en materia penal por expediente, como se evidenció en la Tabla 1, de octubre 2019 a setiembre 2020 (*segundo año posterior a la promulgación de la Ley 9593*) ingresaron 53 expedientes laborales, los cuales representan a 53 personas usuarias indígenas. Es por ello que, se infiere estadísticamente que, por cada expediente ingresado, se representa a una persona usuaria indígena; siendo la misma proporción inferida en el informe de presupuesto del año anterior (*507-PLA-RH-MI-2020*). La entrada de asuntos en materia laboral representa el 7%, respecto a la totalidad de asuntos entrados con personas usuarias indígenas.

Ahora, la dinámica de colaboración entre oficinas para la atención de los asuntos laborales radica en que, la Defensa Pública de Limón cuenta con cuatro personas defensoras que brindan colaboración a Bribri, Matina y Sarapiquí (*procurando que siempre se encuentre al menos una persona defensora en Limón*). La Defensa Pública de Pérez Zeledón cuenta con dos personas defensoras laborales y una de ellas brinda colaboración a Buenos Aires. La Defensa Pública de Cartago brinda colaboración a Tarrazú, ya que la oficina no cuenta con una persona defensora de materia laboral y ahí se atienden las personas indígenas (*Ngäbe, provenientes de Panamá*) que se trasladan a la zona en los tiempos de recolección de café. Además, la Licenciada Ana Briceño explica que normalmente la población indígena se concentra en zonas alejadas, sin embargo, últimamente han demandado el servicio de la Defensa Pública Laboral un grupo de indígenas ubicados en las cercanías de Pavas, los cuales cuentan con doble grado de vulnerabilidad, ya que son personas migrantes (*Mosquitas, provenientes de Nicaragua*). Esto explica por qué en los datos estadísticos enviados por el Licenciado Esteban Arguedas se reporta el ingreso de 2 expedientes laborales en la Defensa Pública de San José y, 3 expedientes en la Defensa Pública de Goicoechea, de octubre 2019 a setiembre 2020.

En la ***Figura 2*** se mostró el comportamiento de la entrada de asuntos con personas usuarias indígenas, donde para materia laboral se evidencia una tendencia al decrecimiento, siendo la entrada a nivel nacional para el primer año posterior (*de octubre 2018 a setiembre 2019*) a la entrada en vigencia de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas de 82 y, para el segundo año (*de octubre 2019 a setiembre 2020*), ingresaron 53 expedientes.

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la entrada de asuntos laborales en la Defensa Pública de Buenos Aires y Bribri, las cuales son las que atienden mayormente a las personas usuarias indígenas y, como se explicó anteriormente, no cuentan con personal laboral permanente, sino que los asuntos se atienden por colaboración de Pérez Zeledón y Limón, respectivamente.

Figura 10

Comportamiento de la entrada de asuntos con persona usuaria indígena,

en el primer y segundo año posterior a la entrada en vigencia de la

Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, en materia laboral

**Fuente:** Subproceso de Modernización Institucional de la Dirección de Planificación, con datos facilitados por la Administración de la Defensa Pública.

De la figura anterior se puede extraer que, la entrada de asuntos laborales para la oficina de Buenos Aires se ha mantenido constante en el tiempo, siendo la entrada de 10 asuntos; mientras, la entrada de asuntos laborales en Bribri sufrió un decrecimiento en el segundo año posterior a la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas, ya que ingresaron 10 asuntos y, en el primer año posterior a la promulgación de la citada ley (*de octubre 2018 a setiembre 2019*), ingresaron 28 expedientes.

El estudio es el 30-PLA-PI-2016 “*Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial ante la implementación de la Reforma al Código de Trabajo*” de la Dirección de Planificación se estableció un circulante de 400 expedientes por persona defensora y, una entrada diaria de entre 3 y 4 usuarios nuevos; es por esto que, la entrada de asuntos de las oficinas descritas en la figura anterior justifica la atención del servicio por medio de la colaboración entre oficinas.

En síntesis, dado a que el ingreso de asuntos tiene el comportamiento descrito en el párrafo anterior, se infiere que no se detectan variables cuantitativas que afecten la dinámica de atención de los asuntos laborales con personas usuarias indígenas en calidad de interviniente.

## Seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe 507-PLA-RH-MI-2020 de la Dirección de Planificación

El Consejo Superior en sesión extraordinaria 38-2020 (*Presupuesto 2021*), celebrada el 17 de abril de 2020, artículo XXI, referente al estudio de Requerimiento de Recurso Humano, dispuso aprobar 507-PLA-RH-MI-2020 “*Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial, (Defensa Pública) a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas*”, posteriormente en sesión extraordinaria de Corte Plena 31-2020 celebrada el 2 de junio de 2020, artículos I y II se acordó aprobar el Presupuesto ordinario del Poder Judicial para el 2021 correspondiente a la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. Es por esto que, en este apartado se indicará el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el citado informe técnico:

### Recomendaciones a la Jefatura de la Defensa Pública

* Debido a que la Ley 9609 “*Código Procesal Agrario*” no ha entrado en vigencia, la siguiente recomendación aún no se ha efectuado: *“Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la ley 9609 “Código Procesal Agrario” la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Agrario, de manera que, de no alcanzar la cuota establecida de los 180 asuntos, se le asigne asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.”*
* Dado a que a la fecha no se han asignado las plazas de persona defensora que se recomendaron en el informe del anterior, no se ha cubierto la necesidad identificada.
* Respecto a las siguientes recomendaciones:

*“Reiterar la circular interna de la Dirección de la Defensa Pública, acerca de la importancia de hacer uso y reportar de forma correcta en los cuadros estadísticos la variable de cantidad de personas usuarias de la Defensa Pública que pertenecen a algún grupo indígena, servidor judicial, con ingreso durante cada período; dado a que, los datos remitidos al Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, son los que se utilizarán como base para futuros estudios que permita mejorar el acceso a la justicia de dicha población.”*

*“Continuar con las capacitaciones a las personas defensoras públicas que manifiesten la necesidad, de tal forma que puedan incursionar en otras áreas de servicio, ya que según la ley de control interno se debe dar el mayor aprovechamiento de los recursos y en este caso particular en la distribución de las cargas de trabajo.”*

La Supervisión de Asuntos Indígenas indica que la Defensa Pública ha efectuado múltiples esfuerzos en la sensibilización del personal defensor, en cuanto a la forma en qué se deben tratar los asuntos donde intervengan personas usuarias indígenas, ya que estas personas por lo general deben recorrer largas distancias para apersonarse ante la autoridad judicial, además de que en su mayoría son personas de escasos recursos, de baja escolaridad, entre otros factores de vulnerabilidad. Adicionalmente, para enero de 2021 se implementó una nueva herramienta para la recolección de datos estadísticos a nivel nacional de las personas usuarias indígenas atendidas y expedientes; es por esto que, para el presente año se pretende contar con información estadística completa para futuros estudios técnicos en la materia.

### Recomendaciones a la Dirección de Tecnología de Información

* El Señor Carlos Morales Castro, Coordinador de Unidad de Inteligencia de Negocios, indica que se desarrolló una mejora en para incluir la etnia del SSC, y actualmente SIGMA cuenta con tableros generales para ver esos datos. Esto en respuesta a la recomendación: “*Según lo manifestado en el oficio 662-DTI-2020 de la Dirección de Tecnología de Información, la Unidad de Inteligencia de la Información desarrollará durante el primer semestre de 2020 desarrollará la mejora para extraer los datos de la variable etnia del Sistema de Seguimiento de Casos, con esto la información de los casos de la Defensa Pública se mostrarán dentro de las estadísticas en los reportes del SIGMA”.* **Ver apéndice 5**.
* Respecto a la recomendación: “*Se mantiene la recomendación realizada en el informe 634-PLA-RH-MI-2019: Coordinar lo relacionado con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios”*, la Señora Fabiola Arancibia Hernández, de la Dirección de Tecnología de Información, indica que las implantaciones del SSC se realizan en la Defensa Pública, según se confirma en el oficio 662-DTI-2020. **Ver apéndice 5**.

### Recomendaciones a la Escuela Judicial

Se recibieron dos respuestas, en seguimiento a la siguiente recomendación:

*“Según las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril de la Comisión de Acceso a la Justicia, se incorporan las siguientes recomendaciones.*

* + *Priorizar el fortalecimiento de las competencias de los equipos de trabajo que están a cargo de procesos penales vinculados en las poblaciones indígenas.*
  + *Fomentar la capacitación virtual, compartiendo espacios virtuales y presenciales, maximizando tiempos de desplazamientos, recursos económicos, y viáticos, entre otros.*
  + *Verificar que los contenidos de los diseños de las capacitaciones en Derecho Indígena, se incluya al menos:*

*a) Normativa internacional referida a los derechos de las personas indígenas, entre ellos, el Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países 1957 (Convenio 107 OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007, Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016.*

*b) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada con pueblos Indígenas incluyendo la Opinión Consultiva 23-2017.*

*c) Constitución Política, Ley Indígena, Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, entre otras.*

*d) Jurisprudencia de las Salas de Casación y de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; d) Lineamientos y circulares de Corte Plena y del Consejo Superior vinculados con las reglas para los procesos en los que estén involucradas personas indígenas.*

*Además, los alcances y distinción entre el sistema monista y el pluralismo jurídico. Incluyendo, el establecimiento de un modelo de control y seguimiento a fin de medir el impacto de esas capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias de las personas servidoras judiciales que asistan y su concreción en las resoluciones –incluyendo las sentencias- que emitan en los procesos propios de su competencia, con absoluto respeto al principio de independencia judicial y los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, entre otros.”*

La primera respuesta se recibió por correo electrónico del 09 de febrero de 2021, remitido por el Señor Jean Carlo Monge Madrigal; en el que se indica que la Escuela Judicial se encuentra desarrollando un curso de capacitación virtual que tendría una duración de ocho semanas y la temática se enfoca en la caracterización de las personas y pueblos indígenas. **Ver apéndice 6**.

La segunda respuesta es remitida mediante el oficio EJ-ACAD-001-2021 del 10 de febrero de 2021, remitido por el Señor Gustavo Céspedes Chinchilla, Coordinador del Área Académica de la Escuela Judicial; donde se indicó que en diciembre de 2020 la Escuela Judicial impartió un foro llamado “*Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas*”, en el cual participaron aproximadamente 70 personas, entre ellas personas servidoras judiciales, indígenas, intérpretes, funcionarias de la Fuerza Pública, entre otras. Además, en el citado oficio se indicó que la Escuela Judicial en el 2020 realizó esfuerzos en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para la realización de la actividad académica denominada “*Especialización en Derechos de los Pueblos Indígenas*” y, también se encuentra diseñando un curso virtual autoformativo llamado “*Breve acercamiento a los pueblos y personas indígenas de Costa Rica*”. Para el año 2021, la Escuela Judicial tiene programado impartir nuevamente el foro llamado “*Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas*”, con colaboración de la Subcomisión de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas y, está desarrollando el aula virtual del curso “*Breve acercamiento a los pueblos y personas indígenas de Costa Rica*” y dos cursos virtuales auto formativos. Por último, el oficio en mención informa que la Escuela Judicial tuvo que prescindir de la actividad académica que estuvo coordinando con la Universidad de Costa Rica, debido al recorte presupuestario en la partida correspondiente.

Adicionalmente, la Dirección de Planificación recibió notificación del informe número EJ-DIR-146-2020, del 10 de agosto de 2020, suscrito por la licenciada Rebeca Guardia Morales, Directora interina de la Escuela Judicial, relativo al Impacto organizacional y presupuestario en el Poder Judicial (Defensa Pública), a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso la Justicia de los Pueblos Indígenas; del cual se toma nota respecto a las siguientes manifestaciones:

*(…) “La Escuela Judicial aplica la evaluación de la efectividad (primer nivel), el cual es de reacción o satisfacción, y que consiste en medir si la persona está satisfecha con la acción de capacitación, conforme a sus necesidades y expectativas de aprendizaje. Para plantear una evaluación que muestre el comportamiento en el desempeño de la persona capacitada, deben utilizarse instrumentos más concretos, y realizarse en un período posterior a seis meses de realizada la capacitación, conforme en la etapa 3 de los procesos de evaluación, de acuerdo a la metodología aprobada.”*

*(…) “En el año 2019 se inició el trabajo de preparación del curso auto formativo en Ejes transversales solicitado, con la colaboración de las personas que representan a las oficinas de los respectivos ejes transversales: Secretaría Técnica de Género, Centro de Gestión de Calidad, Dirección Ejecutiva (Ambiente), Secretaría Técnica de Ética y Valores, Unidad de Acceso a la Justicia. En esa ocasión surgieron algunas inquietudes que se presentaron ante Carrera Judicial pues incidían directamente en el proceso de elaboración del curso. Ante esta consulta, y el análisis de las personas especialistas, se arribó a la siguiente propuesta:*

*“Se sugiere utilizar los cursos ya existentes en la plataforma de Gestión Humana, por lo que deben actualizarse y establecerse como obligatorios. Estos los cursarían las personas oferentes elegibles de la Judicatura, y Carrera Judicial realizaría el proceso de seguimiento en la ejecución de los mismos. De igual forma, se propuso que se considerara la capacitación sobre los ejes transversales tanto en el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) como dentro del Programa Nivelación General Básica, que actualmente realiza la Escuela Judicial.”.*

### Recomendaciones al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejora miento de la Función Jurisdiccional

Como respuesta al seguimiento, se recibe el oficio 44-CACMFJ-JEF-2021 del 02 de febrero de 2021, remitido por la Señora Maricruz Chacón Cubillo, Directora del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional; en el que se indica el cumplimiento de la siguiente recomendación:

*“Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia, divulgar en conjunto con el Departamento de Prensa y Comunicación la Circular 188-2019 de la Secretaría de la Corte referente a los 20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica. Principalmente a lo establecido en los ejes 6 y 7.*

*Asimismo, se podrá solicitar colaboración a las Administraciones Regionales involucradas para obtener un mayor impacto en el personal judicial de cada zona.”*

En el citado oficio se indica que en cumplimiento de lo se remitió comunicado dirigido a las juezas coordinadoras y jueces coordinadores a nivel nacional, reiterando la Circular No. 188-19 “*Modificación a la Circular N° 123-2019 Sobre los 20 ejes de acción, recomendados por la Comisión de Acceso a la Justicia, con ocasión del cumplimiento de las Medidas Cautelares N° 321-12 del 30 de abril de 2015, establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Costa Rica*". **Ver apéndice 7**.

### Recomendaciones a Unidad de Acceso a la Justicia

La recomendación del informe anterior es la siguiente: **Ver apéndice 9**.

*“Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, elaborar y remitir a los diferentes ámbitos involucrados un formato o plantilla que contenga todas las variables de interés en lo referente a asuntos indígenas.*

*Posteriormente, los insumos recabados deberán ser consolidados y será la misma Unidad de Acceso a la Justicia quien elabore un informe con los resultados más relevantes y de interés institucional para la toma de decisiones en relación con la temática indígena.*

*Este informe deberá ser presentado ante el Consejo Superior con una periodicidad al menos semestral.”*

En respuesta al seguimiento se recibe correo electrónico de la Master Melissa Benavides Víquez, del a Unidad de Acceso a la Justicia; donde se indica textualmente:

*“Espero se encuentre bien. Conforme nuestra conversación y los correos adjuntos, le comento que desde la Subcomisión de Pueblos Indígenas dos personas expertas, junto con la Oficina de Control Interno, la Magistrada Damaris Vargas y mi persona, trabajamos en un instrumento denominado “Controles mínimos que deben cumplir las oficinas judiciales asociadas al acceso a la justicia de la población indígena” que se conocerá en la sesión de esta subcomisión del día de mañana. Ese instrumento se espera tenga VB de la Comisión de Acceso a la Justicia el día martes y se envíe a Consejo Superior para que se apruebe como una circular vinculante para la institución. Del mismo modo se está trabajando un tema de indicadores para registrar las personas usuarias en los sistemas institucionales, se solicitó un dictamen a Dirección Jurídica sobre los alcances de lo que es información sensible y se aprobó en Consejo Superior recientemente. Estamos atentas a la notificación sobre lo resuelto.”*

Además, se recibió el oficio CACC-110-2021 del 16 de febrero de 2021, remitido por la Máster Melissa Benavides Víquez, Coordinadora Unidad de Acceso a la Justicia; donde se remite el acuerdo tomado por la Comisión de Acceso a la Justicia de Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad en la sesión virtual celebrada el martes 09 de febrero de 2021, artículo V con temática “*Revisión de Controles mínimos que deben cumplir las oficinas judiciales asociadas al acceso a la justicia de la población indígena*”, donde se tiene el siguiente acuerdo:

*(…) “Se da el visto bueno por parte de la Comisión para que sea remitido para su gestión ante el Consejo Superior del Poder Judicial, la comunicación se hará desde la Oficina de Control Interno. 3.- Comuníquese al Departamento de Planificación como respuesta al oficio 507-PLA-RH-MI-2020.”*

### Recomendaciones a la Dirección de Planificación

La recomendación brindada es:

*“Una vez que se cuente con la mejora en los sistemas informáticos, que el Subproceso de Estadística de la Dirección de Planificación, verifique contar con la fórmula estadística de todas las materias para determinar la cantidad de expedientes donde figure una persona indígena, así como servidores judiciales, con el fin de contar con el insumo para futuros estudios que permitan establecer la proyección de la demanda del servicio.”.*

Como respuesta se recibió un correo electrónico de la Señora Marlen Vargas Benavides, Coordinadora del Subproceso de Estadística; donde se indica que ya se cuenta en el sistema SIGMA un reporte estadístico para determinar asuntos entrados y activos con persona usuaria indígena, sin embargo, aún no se no dispone de las bases de datos del personal judicial para poder bridar el dato.

# Elementos resolutivos

* Respecto a la plaza de Supervisión de Asuntos Indígenas de la Defensa Pública, se consulta a la Dirección de Gestión Humana el acuerdo del Consejo Superior que aprueba la creación de dicha plaza (*según se explicó en el apartado* ***II. Antecedentes*** *y* ***V. Metodología***) y, como respuesta se obtiene que, dicha plaza se creó con una cuota de atención de 48 personas usuarias indígenas por mes y, según el acuerdo de la instancia superior, se asume que dicha plaza contaría con circulante, dado que explícitamente menciona que la cuota mensual establecida es alta considerando traslados a zonas indígenas y choques de audiencias, entre otros. No obstante, de acuerdo con la minuta 43-PLA-MI-2021, la Supervisión de Asuntos Indígenas al 25 de enero de 2021 menciona que funge como co-defensa en cinco asuntos que se consideran de alta complejidad debido al alta cantidad de personas indígenas en calidad de intervinientes; aunado a que brinda colaboración en visitas carcelarias de personas defensoras que representa personas indígenas y son de oficinas alejadas a la capital. Además, se tiene el antecedente de que, por propuesta de la Jefatura de la Defensa Pública se aprueba la propuesta de “*Modernización de la Estructura Organizacional de la Defensa Pública*”, por lo que se infiere que la cuota de entrada mensual descrita anteriormente para la Supervisión de Asuntos Indígenas será sustituida por la carga de trabajo, a raíz de la implementación de la estructura organizacional por procesos, de la Defensa Pública.
* En la atención de materia penal, se analizan las oficinas de la Defensa Pública que representan la mayor cantidad de asuntos entrados con persona usuaria indígena a nivel nacional, considerando los recargos que ha asumido el personal defensor penal en razón de atender a esta población que en su mayoría se encuentra en condición de vulnerabilidad. Se infirió estadísticamente, con base en el Modelo de Tramitación aprobado para la Defensa Pública, que las oficinas de mayor demanda de personas usuarias indígenas en asuntos de materia penal cuentan con el personal defensor requerido para su debida atención.
* En la atención de asuntos agrarios, se analizan los asuntos entrados en el año 2020 y en años anterior, donde se determina que la tendencia es al decrecimiento; contrario a la tendencia del circulante. Sin embargo, hay que tener en consideración que el año anterior fue atípico, debido a que por la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19 se suspendieron audiencias y diligencias, que impactaron en el rezago a nivel general. En el informe 507-PLA-RH-MI-2020 (*115 procesos en promedio por persona defensora*) se realizó el mismo análisis y el personal defensor se encontraba por debajo de los 180 asuntos activos en concordancia a la recomendación de la coordinación de materia; mientas que para el cierre de diciembre 2020, seis de las 16 plazas se encontraban por encima del circulante recomendado (*considerando todos los asuntos atendidos, no sólo agrarios*).
* En cuanto al recargo de asuntos del personal defensor agrario en la co-defensa de asuntos contenciosos administrativos, el Doctor Roberto Montero García considera que dicho recargo debería recaer en el personal defensor administrativo de la Defensa Pública y no en el personal defensor agrario, por la naturaleza de su formación. Además, de que la carga de trabajo sustancia recae sobre el Doctor Montero García; este criterio es compartido por el Licenciado Mario Rosales Vargas, Coordinador de Materia Agraria de la Defensa Pública; y podría ser considero por la Jefatura de la Defensa Pública, más que el personal defensor agrario reporta un incremento en los asuntos activos.
* La plaza que asume la representación de los asuntos contenciosos administrativos donde interviene una persona usuaria indígena o una persona servidora judicial reporta al cierre de enero 2021 un total de 37 expedites activos, donde 33 ellos son persona usuaria indígena, 3 con persona funcionaria judicial y una persona se encuentra privada de libertad (*no indica si es persona indígena*); sin embargo, por la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19, el Doctor Montero García indicó en la sesión de trabajo del 01 de febrero de 2021 indicó que, el movimiento se vio afectado y, según el Libro de Registro ingresaron cuatro asuntos en el 2020, discriminando los asuntos que se reportan con fecha de ingreso “*01/01/2020*”, ya que se asume que fueron los asuntos activos con los que asume la plaza el Doctor Montero García.
* Respecto a la atención de asuntos alimentarios en la zona sur del país (*primer y segundo circuito judicial de la zona sur*), se analiza la dinámica de trabajo del personal defensor y las colaboraciones que se brindan entre oficinas y se determina que, tal y como se infirió en el informe **507-PLA-RH-MI-2020**, la oficina de Buenos Aires requiere de una plaza de persona defensora para la atención de Pensiones Alimentarias en asuntos donde intervengan personas usuarias indígenas demandadas, manteniendo el recargo de asuntos de Familia de Corredores, Osa y Buenos Aires (*aproximadamente 37 al año*); ya que se estima que la mayoría de las personas usuarias indígenas carezcan de recursos económicos para costear una defensa privada. La entrada promedio anual con persona usuaria indígena reportada por el Juzgado Contravencional de Buenos Aires (*materia pensiones alimentarias*) es de 100 de asuntos y, los demás despachos jurisdiccionales que atienden la materia alimentaria en la zona sur (*excluyendo Pérez Zeledón, ya que cuenta con cuatro recursos*) reportan un promedio de ingreso total de 31 expedientes anuales. Es por esto que, la plaza de persona defensora que se detecta como necesidad en la zona sur del país, al brindar colaboración a la oficina de Osa, Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez tendría una entrada anual promedio de 131 expedientes alimentarios y 37 expedientes de Familia (*58% de la entrada recomendada*), estando por debajo de la entrada recomendada. No obstante, considerando los traslados a las oficinas a las que le brindaría colaboración y, las visitas a las zonas indígenas en procura de la divulgación del servicio brindado por la Defensa Pública; se podría valorar que esta plaza colabore en materia penal o en las necesidades que detecte la Jefatura de la Defensa Pública, siempre manteniendo su prioridad de atención en materia alimentaria.

Es importante aclarar que la Dirección de Planificación detectó la necesidad de otra plaza para para la atención de personas usuarias en Pensiones Alimentarias en la oficina de Buenos Aires (*un total de dos plazas en la oficina*) y que la plaza de la oficina de Corredores mantiene una entrada por encima del promedio anual recomendado, sin embargo, el alcance del presente informe corresponde al impacto producto de la promulgación de la **Ley 9593 de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**, la cual impacta directamente en la representación gratuita de personas indígenas en calidad de demandados y, es por esto que, las necesidades de recurso humano de la zona sur para la atención de la parte actora en los procesos alimenticios serán cubiertas cuando se doten las plazas de Defensora o Defensor Público (*atención de personas usuarias indígenas y no indígenas*) recomendadas por Corte Plena en sesión 31-2020 celebrada el 2 de junio del 2020, artículo II (*ver antecedentes*).

* En cuanto a la atención de asuntos alimentarios de las oficinas de la Defensa Pública de Upala y Guatuso se detecta que, la persona defensora responsable de ambas oficinas (*se traslada de Upala a Guatuso*) mantiene una entrada promedio anual de 457 expedientes, lo cual es superior a la entrada recomendada para el personal defensor alimentario. Sin embargo, la entrada de asuntos reportada por el área jurisdiccional con persona usuaria indígena es de 5 expedientes anuales (*4 de ellos en Guatuso* *y 1 en Upala*) y, al tratarse el alcance del presente informe técnico acerca del impacto producto de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas; la Dirección de Planificación detecta que prevalece la necesidad de recurso en la zona y, recuerda que el mismo será suplido en cuanto se doten las plazas recomendadas por Corte Plena en sesión 31-2020 celebrada el 2 de junio del 2020, artículo II, donde aprobó la inclusión en el presupuesto extraordinario 2021 de la Institución 33 plazas de Defensora o Defensor Público, además, se recomienda que la Jefatura de la Defensa Pública considere la ubicación de un recurso en la zona (*ver antecedentes*).
* Al analizar la dinámica de trabajo del circuito de Cartago y, el reporte del área jurisdiccional, se detecta la necesidad de una plaza que colabore en la tramitación de asuntos en la zona de Turrialba, debido a que el profesional de la zona cuenta con una entrada promedio anual de 478 expedientes, estando por encima de lo recomendado. Aunado a que, se traslada a Jiménez (*Juan Viñas*) para la atención de personas usuarias de la zona (*indígenas y no indígenas*) y por ello, el servicio en la zona de Turrialba se descontinúa. Además, la entrada promedio anual de asuntos con persona usuaria indígena del Juzgado Contravencional de Turrialba (materia Pensiones Alimentarias) y del Juzgado Contravencional de Jiménez (materia Pensiones Alimentarias) es de 21 y 2, respectivamente. Aunado a que el Juzgado Familia, Penal Juvenil Y Violencia Doméstica De Turrialba (*materia Familia*) reporta el ingreso anual promedio de cinco expedientes con persona usuaria indígena. En ese sentido y, como se explicó en el apartado **III. Antecedentes**, esta necesidad será suplida en cuanto se doten las plazas de Defensora o Defensor Público (*atención de personas usuarias indígenas y no indígenas*) recomendadas por Corte Plena en sesión 31-2020 celebrada el 2 de junio del 2020, artículo II.
* En cuanto a la atención de asuntos alimentarios en el primer circuito de la Zona Atlántica, tal y como se infirió en el informe **507-PLA-RH-MI-2020**, la oficina de Bribri requiere de una plaza de persona defensora para la atención de Pensiones Alimentarias en asuntos donde intervengan personas usuarias indígenas demandadas; ya que se estima que la mayoría de las personas usuarias indígenas carezcan de recursos económicos para costear una defensa privada. La entrada promedio anual con persona usuaria indígena reportada por el Juzgado Contravencional de Bribri (*materia pensiones alimentarias*) es de 88 de asuntos y, el Juzgado Contravencional del Primer Circuito de la Zona Atlántica (*materia pensiones alimentarias*) y el Juzgado Contravencional de Matina (*materia pensiones alimentarias*) reportan 10 y 3 asuntos entrados en promedio con persona usuaria indígena; es por esto que se estima que esta plaza tenga una entrada de aproximadamente 101 expedientes anuales, estando por debajo de lo recomendado. En ese sentido, esta plaza podría realizar visitas frecuentes a las zonas indígenas con el propósito de divulgar el servicio de la Defensa Pública (*en todas las materias, no solo alimentaria*) y, podría colaborar en la atención de asuntos alimentarios de personas actoras en Limón, ya que estas personas defensoras mantienen una entrada promedio anual superior a la recomendada, aunado a que se trasladan para colaborar a otras oficinas. Además, mientas la carga de trabajo lo permita y no se desvirtúe la prioridad de atención de la materia alimentaria en caso de que la demanda aumente, esta plaza podría colaborar en asuntos penales y, en lo que considere pertinente la Jefatura de la Defensa Pública.

Es importante aclarar que la Dirección de Planificación detectó que el personal defensor de Limón se encuentra por encima de la entrada promedio recomendada y es por esto que la plaza que se recomendó anteriormente para la Defensa Pública de Bribri podría colaborar con la atención de personas usuarias demandadas de Limón, sin embargo, el alcance del presente informe corresponde al impacto producto de la promulgación de la **Ley 9593 de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas**, la cual impacta directamente en la representación gratuita de personas indígenas en calidad de demandados y, es por esto que, las necesidades de recurso humano del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica para la atención de la parte actora en los procesos alimenticios serán cubiertas cuando se doten las plazas de Defensora o Defensor Público (*atención de personas usuarias indígenas y no indígenas*) recomendadas por Corte Plena en sesión 31-2020 celebrada el 2 de junio del 2020, artículo II, (*ver antecedentes*).

* En la dinámica de trabajo para la atención de asuntos laborales, como se mencionó anteriormente, las oficinas de Buenos Aires y Bribri no cuentan con un recurso de persona defensora destacado en dichas oficinas; la atención de asuntos laborales se realiza por colaboración de Pérez Zeledón y Limón, respectivamente. En ese sentido se analiza la tendencia del ingreso de asuntos laborales con persona usuaria indígena y se determina que es al decrecimiento a nivel nacional, es por ello que no se detectan variables cuantitativas que afecten la operativa del personal defensor que brinda servicio entre oficinas.

# Contenido presupuestario

En el siguiente cuadro, se detalla el costo estimado de las dos plazas extraordinarias de Defensor Público, las cuales asumirán como parte de la carga de trabajo ordinaria la atención de los asuntos de Pensión Alimentaria donde figure como parte actora o demanda una o más personas indígenas. Además, se estima el costo estimado del mobiliario y equipo a asignar a las plazas en mención.

Tabla 8

Estimación del costo estimado para el 2022, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Período** | **Costo Estimado** |
| Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública | 2 | Clase 3990. Defensor Público | - | Ordinaria | 12 meses | ₡105.734.000 |
| Mobiliario y equipo a asignar para plazas profesionales | | | | | | ₡3.356.545 |
| **Total** | | | | | | **₡105.354.545** |

**Nota (1):** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2022 es de ₡50.999.000*

**Nota (2):** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2022 es de ₡1.678.273*

**Fuente:** Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación

# Recomendaciones

## A Corte Plena

En razón de las limitaciones presupuestarias, mencionadas en el apartado **III. Antecedentes** del presente informe, se plantean dos escenarios para el cumplimiento de la necesidad de personal para el efectivo acceso a la justicia a las personas usuarias indígenas.

### Escenario 1: Inclusión de plazas dentro del presupuesto 2022

Incluir dentro del presupuesto 2022, dos plazas de Defensora o Defensor Público para la atención de asuntos de Pensión Alimentaria, que se recomienda, mientras la carga de trabajo lo permita, brinde colaboración en materia penal y demás disposiciones de la Jefatura de la Defensa Pública; con el fin de dar sostenibilidad al plan de trabajo propuesto en este informe; dado a que, al reforzar la estructura del recurso humano de la Defensa Pública de Bribri y la Defensa Pública de Buenos Aires, se estaría en la capacidad para asumir la atención ordinaria de asuntos donde figure como parte actora o demanda una o más personas usuarias indígenas.

Tabla 9

Estimación del costo estimado para el 2022, dos plazas extraordinarias de Defensor Público que atienden materia Pensión Alimentaria.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Despacho** | **Cantidad** | **Tipo de plaza** | **Condición actual** | **Recomen-dación** | **Período** | **Costo Estimado** |
| Unidad de Pensión Alimentaria de la Dirección de la Defensa Pública | 2 | Clase 3990. Defensor Público | - | Ordinaria | 12 meses | ₡105.734.000 |
| Mobiliario y equipo a asignar para plazas profesionales | | | | | | ₡3.356.545 |
| **Total** | | | | | | **₡105.354.545** |

**Nota (1):** *Costo promedio por puesto de Defensor Público, para el 2022 es de ₡50.999.000*

**Nota (2):** *Costo total de gasto variable por cada plaza Profesional (Defensor Público), para el 2022 es de ₡1.678.273*

**Fuente:** Modernización Institucional, con datos suministrados del Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos de la Dirección de Planificación

### Escenario 2: Reubicación de personal defensor

Como se menciona en el presente informe, la Dirección de Planificación se encuentra desarrollando el Proyecto “***Mejora Integral del Proceso Penal***”, donde se considera que, en los casos en que el criterio de este ente técnico lo indique, se podrá plantear la posibilidad de movilizar plazas de Defensora o Defensor Público, con el propósito de suplir la necesidad de personal para la atención de personas usuarias indígenas en la Defensa Pública de Bribri y Buenos Aires, a partir de la promulgación de la Ley 9593 de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en el entendido que una posible movilización de recursos dependerá meramente de los estudios técnicos realizados y de una priorización según las necesidades institucionales previamente detectadas.

Importante aclarar que, si bien este escenario no tiene impacto directo en el presupuesto de la institución, se dependerá del cronograma del Proyecto “***Mejora Integral del Proceso Penal***” y, por ende, se imposibilita determinar el momento en que se podrá suplir las necesidades detectadas en el presente informe.

A febrero de 2021, se puso en conocimiento de las partes involucradas el informe 1893-PLA-MI-OI-2020 “*Informe del abordaje realizado en las oficinas de Flagrancia del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José (Defensa Pública – Ministerio Público – Judicatura)*” de la Dirección de Planificación el 24 de noviembre de 2020; donde se plantean dos posibles escenarios producto del abordaje realizado en los despachos de Flagrancia (*Primer y Segundo Circuito*) y, uno de estos escenarios considera la recomendación de movilizar de una plaza de Defensora o Defensor Público a la oficina de Buenos Aires, según aprobación del Consejo Superior mediante el informe **507-PLA-RH-MI-2020**, en la sesión del 17 de abril de 2020 (*Presupuesto 2020*), artículo XXI y aprobado por Corte Plena, el 02 de junio de 2020 (*Presupuesto 2020*). Además, en razón a la circular 188-19 de la Corte Plena, aprobada el 27 de mayo de 2019, acerca de los 20 ejes de acción recomendados por la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia, con ocasión al cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 del 30 de abril de 2015 establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Costa Rica. De ser aprobado el citado escenario por las instancias superiores, esta propuesta solventaría uno de los dos recursos recomendados en el informe 507-PLA-RH-MI-2020, mismos recursos que recomiendan en el presente informe técnico.

## Al Consejo Superior

* Según recomendación dada por la Comisión de Acceso a la Justicia, valorar la posibilidad de declarar obligatoria la participación de las personas servidoras judiciales en las capacitaciones sobre Derecho Indígena, ampliar a sensibilización, atención y acceso a la justicia de pueblos indígenas en cumplimiento de la **Ley de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas**, especialmente quienes tengan competencia material y territorial para conocer de procesos judiciales vinculados con el pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre y la Circular 188-19 de Corte Plena.

Sin embargo, con el fin de contar con un criterio legal, esta recomendación podrá ser remitida previamente a la Dirección Jurídica para su análisis, con el fin de que emita su valoración jurídica respecto a la obligatoriedad

* A partir del análisis histórico cuantitativo y cualitativo de datos de Pensiones Alimentarias y la experiencia de las plazas asignadas a esta materia por parte de la Defensa Pública, se recomienda para efectos de estudios técnicos de cargas de trabajo, asignación de recursos de humano, planes de trabajo, entre otros; se establezca la entrada para una plaza de Defensora o Defensor Público entre 388 y 400 expedientes de Pensiones Alimentarias nuevos por año (*entrada*).

## Recomendaciones generales

### A la Jefatura de la Defensa Pública

* Recordar el personal defensor, por medio de una circular interna, la importancia de completar adecuadamente los controles internos de la oficina, sea el Sistema de Seguimiento de Casos o en su defecto, los Libros de Registro o el reporte de personas indígenas implementado el presente año. Además, se recomienda implementar una mejor en cuanto a la tabulación de la información de la colaboración que se brinda entre oficinas, de manera que las personas representadas y procesos judiciales se reporten en las oficinas que por competencia le corresponde, aunque la atención la brinde una servidora o servidor judicial de otra oficina.
* Capacitar al Doctor Roberto Montero García y a las Supervisiones y Coordinaciones de Materia de la Defensa Pública en la tramitación de asuntos con persona usuaria indígena, de manera que se unifiquen criterios en cuanto a la asesoría hacia el personal defensor que representa a esta población en condición de vulnerabilidad y, las eventuales consultas sean abordadas por los superiores de materia, en búsqueda de descentralizar las consultas a la actual plaza de Supervisión de Asuntos Indígenas, ya que con la implementación de la Estructura Organizativa por Procesos en la Defensa Pública, se le encomendarán funciones adicionales.
* Trasladar la colaboración que brinda la Supervisión de Asuntos Indígenas en cuanto a las visitas carcelarias de personas usuarias indígenas, al Doctor Roberto Montero García, Defensor Público en Materia Contenciosa Administrativa; dado a que como se explicó en el apartado **a.3 Atención de asuntos contenciosos administrativos**, aún no se ha notado un incremento en la demanda de asuntos en dicha materia, inclusive la plaza en mención reportó el ingreso de cuatro asuntos para el 2020 (*6 representaciones, que pueden ser personas indígenas o servidoras judiciales*) y, el área jurisdiccional reportó el ingreso de tres expedientes con persona usuaria indígena para el 2019 y, un expediente para el 2020. Esto en razón de la alta capacitación del Doctor Montero García en la atención de personas en condición de vulnerabilidad y, con el propósito de aumentar su carga de trabajo; siempre procurando la priorización en la atención de personas usuarias indígenas y servidoras judiciales en procesos contenciosos administrativos.
* Solicitar al Doctor Roberto Montero García la confección de un curso de introducción a la materia contenciosa administrativa (*Ley 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo*), diseñado específicamente para el personal defensor que representa personas indígenas, en procura de lograr sensibilización en el trámite de asuntos judiciales desde el punto de vista de derechos humanos. Y, considerar que este curso forme parte de la formación obligatoria del personal defensor; así como, que futuras capacitaciones sean encomendadas en su mayoría al Señor Montero García, en coordinación de la Licenciada Ligia Jiménez Zamora, ya que es experta en atención de personas indígenas y costumbres de los pueblos indígenas, aunado a que cuenta con gran experiencia en la materia.
* Analizar en un plazo de seis meses, posterior de la entrada de vigencia de la **Ley 9609 “*Código Procesal Agrario*”** la carga de trabajo de cada plaza de Defensor Público de materia agraria, de manera que, se determine si la demanda del servicio ha aumentado (*entrada de expedientes*) y, en caso de no alcanzar la cuota del circulante recomendada por la Coordinación de Materia Agraria de la Defensa Pública, de los 180 expedientes, se le asignen asuntos de otras jurisdicciones para completar su carga de trabajo.
* Continuar con la colaboración que brinda la Coordinación de Materia Agraria para con los profesionales que lo requieran, especialmente cuando hay intereses contrapuestos. Así como, se recomienda que la Coordinación de Materia colabore en la descongestión del circulante del personal defensor, tramitando asuntos directamente; ya que como se explicó en el apartado **a.2 Atención de asuntos agrarios**, a pesar de que según los reportes de la coordinación de materia agraria de la Defensa Pública, la mayoría de personas defensoras al cierre de diciembre de 2020 superan la cuota del circulante recomendado (*este comportamiento no se reflejó en el informe del año anterior*) y, la entrada de asuntos disminuyó en el 2020 con respecto al 2019; es por esto que se deduce que el incremento en el circulante se justifica por la suspensión de audiencias y diligencias dispuesta por la Administración de Justicia a raíz de la emergencia nacional provocada por la enfermedad COVID-19. Además, se recomienda que la coordinación figure como persona defensora con una carga de trabajo diferenciada, en concordancia con la circular de la Defensa Pública 13-19 del 25 de octubre de 2019 que estipula que las coordinaciones de materia deben mantener un circulante diferenciado precisamente por su coordinación y, en este caso, a la Coordinación de Materia Agraria se le aprobó la disminución de un 30% de la carga ordinaria de una persona defensora agraria (*entrados y circulante*).
* Continuar con las coordinaciones relacionadas con la implantación y capacitación del Sistema de Seguimientos de Casos (SSC) y SIGMA en las Oficinas de la Defensa Pública que atiendan materia Agraria, con fin de obtener datos estadísticos para futuros estudios técnicos.
* Considerar la posibilidad de trasladar la co-defensa de asuntos contenciosos administrativos al personal defensor de la Unidad Administrativa de la Defensa Pública, en congruencia con el criterio del Doctor Roberto Montero Garcia por la naturaleza de la formación defensor administrativo y debido a que la carga de trabajo sustancial recae sobre su persona y, en procura de descongestionar el circulante del personal defensor agrario, que también mantienen el recargo de procesos civiles donde intervenga una persona usuaria indígena. A este criterio se le une la manifestación de la Coordinación de Materia Agraria, en cuanto a que la figura de co-defensa existe debido a que en los procesos contenciosos administrativos así lo dispone la Ley y, en su momento la Jefatura de la Defensa Pública encomendó la labor al personal defensor agrario; sin embargo, dicha colaboración se ha brindada únicamente en dos ocasiones.
* En caso de que se asignen las dos plazas nuevas a la Defensa Pública por parte de la Asamblea Legislativa, se recomienda se ubique una en la Defensa Pública de Buenos Aires y otra en la Defensa Pública de Bribri y que, prioritariamente atiendan asuntos de personas usuarias indígenas en Pensiones Alimentarias, así como asuntos de Familia de personas usuarias indígenas. Además, se recomienda que la plaza de Buenos Aires brinde colaboración a Osa, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez y, la plaza de Bribri brinde colaboración a la oficina de Limón, debido a las personas defensoras reportan un ingreso promedio anual por encima del recomendado. Y, se recomienda que, mientras la carga de trabajo lo permita, estas personas defensoras realicen visitas a zonas indígenas con el propósito de asesorar a las personas usuarias indígenas en los servicios que brinda la Defensa Pública en todas las materias, de manera que se facilite el acceso a la justicia a esta población que en su mayoría se encuentran en condición de vulnerabilidad. En caso de que aún la carga de trabajo lo permita, se recomienda que se les asignen asuntos penales a las plazas de Defensor Público de la Unidad de Pensión Alimentaria que se encuentren asignadas a las Oficinas de la Defensa Pública de Bribrí y Buenos Aires, para completar las cargas de trabajo. Considerando que de manera prioritaria se deberá atender los asuntos de Pensión Alimentaria.

### A la Dirección de Gestión Humana

Se mantienen las recomendaciones realizadas en el informe 507-PLA-RH-MI-2020:

* Considerar en las condiciones para contratar al nuevo personal las disposiciones de la nueva ley aprobada en su artículo 7 que indica: “(…) Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera asistencia letrada y no pueda cubrir los costos, la administración de justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de forma gratuita (…)”. Adicionalmente, proponer en los concursos de estas nuevas plazas, que las personas contratadas dispongan del conocimiento de los diferentes idiomas indígenas de tal forma que se pueda brindar un acceso real y más directo a las personas asistidas en estas zonas.
* Analizar en los nuevos concursos habilidades blandas como:
  + Disposición para realizar las diligencias in situ.
  + Utilizar diferentes medios de transporte (*caballo, camión, bote, panga, etc.*)
  + Comprender que la condición social y cultural implica procesos cuyo tiempo para invertirles es mayor, pues los canales de comunicación son diversos en los diferentes procesos y según el género.
* Analizar en conjunto con la Defensa Pública las condiciones de los concursos en propiedad de las plazas que atienden la materia agraria, de tal forma que se amplié su condición para que las mismas puedan atender eventualmente otras materias, así como trasladarse a las diferentes zonas que disponga la Dirección de la Defensa Pública.
* A raíz de las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 de la Comisión de Acceso a la Justicia, se solicita valorar la posibilidad de promover dentro de los concursos de la judicatura las capacitaciones referentes a la atención y acceso a la justicia de los pueblos indígenas.
* A raíz de las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 de la Comisión de Acceso a la Justicia, se solicita analizar la posibilidad de incluir la variable de capacitación en Derecho Indígena en los indicadores de evaluación de desempeño y los procesos de reclutamiento, ya sea para nombramientos o ascensos en puestos vinculados con el conocimiento de procesos asociados a personas indígenas.

### A la Dirección Jurídica

* Emitir un criterio jurídico sobre lo manifestado en el oficio JEFDP-365-2020 de la Jefatura de la Defensa Pública, sobre la posibilidad de que una Defensora o Defensor Público pueda conocer materia penal adicional de la materia alimentaria, que indica:

*(...)"se establece por Principio de Legalidad que quien brinda la asistencia letrada debe cumplir dos requisitos:*

*1) especializada en derecho indígena.*

*2) especializada en la materia de competencia.*

*Situación que a la fecha no opera, pues las personas defensoras públicas no tienen una especialidad en derecho indígena, aún y cuando se trata de generar capacitaciones; además se plantea la necesidad de la especialidad en la materia de atención a la persona indígena. Eso nos lleva a considerar que las personas defensoras públicas no deberían de asesorar materias por recargo, que implica otras especialidades, ni que pensiones deba atender penal, o violencia doméstica, ya que justamente por el Principio de Legalidad se requiere la especialización a partir de la condición de la persona usuaria y del tipo de proceso judicial que se asesore."*

Lo anterior debido a las recomendaciones emitidas por la Dirección de Planificación en el presente informe, para la optimización de recursos de la Defensa Pública, tomando en consideración la equidad de las cargas de trabajo entre las personas defensoras y las limitaciones presupuestarias de la institución.

### A la Dirección Ejecutiva

* Según las observaciones emitidas en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril de la Comisión de Acceso a la Justicia, se incorporan las siguientes recomendaciones:
* Buscar nuevas prácticas que incentiven a la incorporación de más personas indígenas en las listas de personas traductoras, para ello podrá elaborar compañas en coordinación con el Departamento de Prensa y Comunicación; o bien, otros métodos que considere procedentes y de alto impacto.
* Solicitar a todas las Administraciones Regionales del país tomar las medidas necesarias para que el pago a las personas traductoras e intérpretes (*principalmente indígenas*) se realice de manera oportuna y cumpliendo con todos los requerimientos legales y políticas institucionales, para poder seguir contando con este apoyo.
* Considerar, las inferencias del presente informe indicadas en el apartado **a.3 Análisis de asuntos activos (*expedientes*)**, en cuanto a la distribución de las personas indígenas representadas por la Defensa Pública según su pueblo de procedencia; esto como insumo para la elaboración de estrategias internas en el momento de gestionar a las personas intérpretes.

### A Despacho de la Presidencia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia y la Dirección Ejecutiva

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, se insta a continuar uniendo esfuerzos para el establecimiento de un convenio interinstitucional con la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas de Costa Rica, para que coadyuven con los peritajes culturales necesarios para la atención de los procesos judiciales.

### Al Ministerio Público

* Según recomendación de la Comisión de Acceso a la Justicia en el oficio CACC-116-2020 del 14 abril, valorar la solicitud de establecer un protocolo diferenciado para la atención de personas indígenas en la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, en el entendido que se deberá garantizar la vida y la integridad de las personas; respetando la pertenencia cultural de esas personas en las medidas que se planteen.

### A la Escuela Judicial

* Con base en lo indicado en el informe EJ-DIR-146-2020, del 10 de agosto de 2020, suscrito por la licenciada Rebeca Guardia Morales, Directora interina de la Escuela Judicial; se recomienda desarrollar una herramienta concreta para la evaluación del comportamiento en el desempeño de la persona servidora judicial capacitada en materia indígena, de forma que se aplique conforme a lo estipulado en la etapas de evaluación, según la metodología aprobada.

# Anexos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexos** | **Nombre** | **Documento** |
| ***Anexo 1*** | **Minuta 43-PLA-MI-MNTA-2021:** Reunión inicial con Licda. Ligia Jiménez y Lic. Esteban Arguedas. |  |
| ***Anexo 2*** | **Minuta 71-PLA-MI-MNTA-2021:** Reunión con el Doctor Roberto Montero (*materia contenciosa*). |  |
| ***Anexo 3*** | **Minuta 73-PLA-MI-MNTA-2021:** Reunión con el Licenciado Mario Rosales (*materia agraria*). |  |
| ***Anexo 4*** | **Minuta 78-PLA-MI-MNTA-2021:** Reunión con Licda. Sandra Mora y Licda. Ana Briceño (*materia alimentaria y laboral, respectivamente*). |  |
| ***Anexo 5*** | **Minuta 87-PLA-MI-MNTA-2021:** Reunión con Licda. Sandra Mora y Licda. Ana Briceño (*materia alimentaria y laboral, respectivamente*). |  |
| ***Anexo 6*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Entrados |  |
| ***Anexo 7*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Circulante |  |
| ***Anexo 8*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Área jurisdiccional, todas las materias |  |
| ***Anexo 9*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Materia Penal |  |
| ***Anexo 10*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Materia Agraria |  |
| ***Anexo 11*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Contencioso Administrativo |  |
| ***Anexo 12*** | **Memoria de cálculo:**  Análisis estadístico – Pensiones Alimentarias |  |

# Apéndices

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apéndice** | **Nombre** | **Documento** |
| ***Apéndice 1*** | Datos estadísticos suministrados por la Administración de la Defensa Pública |  |
| ***Apéndice 2*** | Nuevos datos estadísticos suministrados por la Administración de la Defensa Pública |  |
| ***Apéndice 3*** | Ejemplo del registro de datos de personas indígenas (*oficina de Corredores*) |  |
| ***Apéndice 4*** | Seguimiento a recomendaciones del informe 507-PLA-RH-MI-2020: Dirigidas a la Dirección de TI |  |
| ***Apéndice 6*** | Seguimiento a recomendaciones del informe 507-PLA-RH-MI-2020: Dirigidas a la Escuela Judicial |  |
| ***Apéndice 7*** | Seguimiento a recomendaciones del informe 507-PLA-RH-MI-2020: Dirigidas al Centro de  Apoyo |  |
| ***Apéndice 8*** | Seguimiento a recomendaciones del informe 507-PLA-RH-MI-2020: Dirigidas a la Unidad de Acceso a la Justicia |  |
| ***Apéndice 9*** | Información de la creación de la plaza 370070 de Supervisora o Supervisor de la Defensa Pública en Asuntos Indígenas |  |
| ***Apéndice 10*** | Consulta a coordinación agraria |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Elaborado | Inga. Hazel Calderón Mata , Profesional 2 a.i. |
| Revisado | Ing. Jorge Fernando Rodríguez Salazar, Jefe a.i. del Subproceso de Modernización Institucional |
| Aprobado | Ing. Dixon Li Morales, Jefe a.i. del Proceso de Ejecución de las Operaciones |
| Autorizado | Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación |

rqp

Ref.**292-2021**, 1610-18, 1692-18, 1859-18, 150-19, 384-19,760-19, 225-20, 1552-20,341-21